

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas Bases.

Contra la presente convocatoria, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Illes Balears, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de las Islas Baleares o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes.

Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, del 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Real Decreto 896/1991 y demás disposiciones legales aplicables.

ANEXO

I.- PARTE GENERAL:

Tema 1.- La Constitución Española de 1.978: sistemática y estructura. Contenido. Principios Generales.

Tema 2.- Derechos Fundamentales y libertades públicas: principio general. Concepto. Catalogación. Garantía de los derechos y libertades

Tema 3.- La Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. Las Cortes Generales: concepto y elementos. El Defensor del Pueblo; El Tribunal de Cuentas.

Tema 4.- El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española. Defensa jurídica de la Constitución: el Tribunal Constitucional.

Tema 5.- La organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. Financiación y competencias. Relaciones interadministrativas. Los Estatutos de Autonomía; especial referencia al Estatuto de Autonomía de les Illes Balears.

Tema 6.- Los conceptos de Administración Pública y de Derecho administrativo. La sumisión de la Administración al Derecho. El principio de legalidad.

Tema 7.- El administrado: Concepto y clases. Capacidad del administrado y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado: En especial, los derechos subjetivos y los intereses.

Tema 8.- Régimen Local español. Principios constitucionales. Fuentes del ordenamiento local.

Tema 9.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los ciudadanos. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

Tema 10.- El acto administrativo. Concepto y clases: efectos, invalidez. La notificación: contenido, plazos, etc.

PARTE ESPECIAL:

Tema 1.- Iniciación del procedimiento: Clases; subsanación y mejora de solicitudes. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados; prueba; informes.

Tema 2.- Finalización del procedimiento: Obligación de la Administración de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad y la perención de los procedimientos.

Tema 3.- Los procedimientos de ejecución: Título y medios. Los procedimientos de revisión. Revisión de oficio de actos nulos y anulables; la acción de nulidad; la suspensión de la ejecución del acto sujeto a revisión. Revocación de actos no declarativos de derechos y de gravamen. Rectificación de errores materiales o de hecho. Límites a la revisión.

Tema 4.- Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recursos administrativos; disposiciones generales y actos administrativos impugnables directamente en sede. Suspensión de la ejecución del acto recurrido. Clases de Recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 5.- Régimen Jurídico de los Contratos del Sector Público: Disposiciones generales. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos. Preparación de los contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Organización administrativa para la gestión de la contratación.

Tema 6.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Órganos titulares. Reglamento Orgánico y ordenanzas: Distinción, procedimiento de ela-

boración y aprobación. La publicación de las normas locales.

Tema 7.- El Municipio: Concepto y elementos. El territorio municipal. Creación y supresión de municipios. Alteración de términos municipales. Organización territorial del municipio: Desconcentración y descentralización, distritos y barrios, entidades inframunicipales.

Tema 8.- La población municipal: Clasificación. El empadronamiento. Derechos de los vecinos. La participación vecinal en la Administración Local. Derechos de los extranjeros.

Tema 9.- La organización municipal. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. Otros órganos complementarios. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 10.- Régimen de sesiones y acuerdos de las Corporaciones locales. Normas reguladoras. Las sesiones. Sus clases, requisitos y procedimientos de constitución y celebración. Los acuerdos de las Corporaciones Locales: Clases y formas de acuerdos. Sistemas de votación y cómputo de mayorías. Informes del Secretario y del Interventor. Actas y certificaciones. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 11.- Adquisición y pérdida de la condición funcionarial. Situaciones administrativas. La promoción y sus clases. Derechos del personal funcionario al servicio de las Corporaciones Locales. Derechos colectivos. Deberes y régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal.

Tema 12.- Clases de bienes locales. Los bienes de dominio público: Peculiaridades de su régimen jurídico en el ámbito local; Medios de protección. Bienes patrimoniales de las entidades locales: Adquisición, enajenación, administración, uso y aprovechamiento.

Tema 13.- Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La actividad de fomento en la esfera local. Estudio especial de las subvenciones.

Tema 14.- Los recursos de las Haciendas Locales en el marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales: de los municipios, de las provincias y otras entidades locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no tributarios. La gestión y liquidación de recursos. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia de Haciendas Locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 15.- Régimen jurídico de la recaudación de las Entidades Locales. El pago y otras formas de extinción de las deudas. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio. Los Impuestos Municipales.

Tema 16.- El Presupuesto General de las entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. Las modificaciones presupuestarias. Concepto, clases y tramitación.'

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sant Josep de sa Talaia, 14 de agosto de 2009.
EL ALCALDE, Fdo: Josep Marí Ribas.

— o —

Num. 18833

En el BOIB núm. 88, de 16 de juny de 2009, apareix publicat l'anunci relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança de Policia i Bon Govern.

Acabat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat al·legacions, l'acord fins aleshores inicial, s'entén definitivament aprovat, d'acord amb el que disposa l'art. 49 de la Llei 7/85, per la qual cosa es publica el text íntegra de l'Ordenança de Policia i Bon Govern, que a continuació es transcriu:

‘Sumari

Exposició de Motius

Títol I: Disposicions Generals

Capítol primer: objecte i àmbit de l'Ordenança.

Capítol segon: drets i deures dels habitants.

Capítol tercer: normes generals de convivència ciutadana.

Capítol quart: seguretat en els espais públics.

Capítol cinquè: organització i autorització dels actes públics.

Títol II: Normes de conducta en l'espai públic, infraccions, sancions i intervencions específiques.

Capítol primer: atemptats contra la dignitat de les persones.

Capítol segon: degradació visual de l'entorn urbà.

Capítol tercer: juguesques.

Capítol quart: utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de serveis sexuals.

Capítol cinquè: necessitats fisiològiques.

Capítol sisè: consum de begudes alcohòliques.

Capítol setè: comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i altres productes.

Capítol vuitè: activitats i prestació de serveis no autoritzats, demanda i consum d'aquests.

Capítol novè: ús impropï de l'espai públic.

Capítol desè: activitats vandàliques en l'ús del mobiliari urbà.

Capítol onzè: venda de vehicles de segona mà a la via pública.

Capítol dotzè: altres conductes que dificulten la convivència ciutadana.

Títol III: Tinença d'animals.

Capítol primer: cans.

Capítol segon: animals domèstics.

Títol IV: Remors i olors.

Títol V: Disposicions comunes sobre mesures d'aplicació.

Capítol primer: disposicions generals.

Capítol segon: règim sancionador.

Capítol tercer: reparació de danys.

Capítol quart: mesures de policia administrativa.

Capítol cinquè: mesures de policia administrativa directa.

Capítol sisè: mesures provisionals.

Capítol setè: mesures d'execució forçosa.

Disposició Addicional

Disposició Transitòria

Disposició Derogatòria

Disposicions Finals

I. Exposició de Motius.

L'Ordenança municipal de policia i bon govern d'aquest Ajuntament va ser publicada definitivament el 4 de febrer de 1993, amb la finalitat d'atendre les necessitats, inquietuds i problemàtica existent en les vies i espais públics d'aquest terme municipal.

L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, amb l'ànim de reforçar i facilitar la convivència dels seus veïns i visitants, pretén adequar la present norma a les peculiaritats d'aquest municipi i també, de forma molt especial, apropar la norma al coneixement públic. Per això, i per facilitar la seva difusió i coneixement general, se'n realitza aquesta edició, tot desitjant que amb l'observança i el compliment d'aquesta Ordenança per part de tots, aconseguim el benestar social i la qualitat de vida que espera i mereix tota persona que es trobi en aquest municipi.

Fent honor a la consecució d'aquesta finalitat, es pretén harmonitzar de manera equànime l'interès públic i privat, amb la finalitat de garantir la convivència de veïns, visitants i empresaris del terme.

La convivència en comunitat és la base del progrés humà i aquesta, de per si, implica l'acceptació i compliment d'algunes normes socials que fan possible l'exercici dels drets individuals de les persones alhora que els fa compatibles amb l'exercici dels drets dels altres. Amb la finalitat de vetllar pel lliure exercici d'aquests drets, es fa necessària l'actuació contra actituds antisocials que per minories poden ser exercides de formes molt diverses, més o menys greus, en les mateixes vies urbanes, sobre el seu mobiliari, parcs, edificis públics i privats, i molt especialment en zones d'espectacles i esbargiment, així com sobre altres béns i drets que suposen un detriment de la qualitat de vida i de la imatge del municipi i dels seus veïns.

En vista d'aquest objectiu, la present Ordenança de policia i bon govern es planteja com una ferramenta destinada a clarificar o renovar algunes normes de convivència, potenciant l'àmbit essencial de les relacions humanes, fet que no s'ha d'entendre com un afany regulador de la vida de les persones, sinó com un instrument per a la resolució de conflictes i la millora de la tranquil·litat, seguretat i imatge del municipi davant la ciutadania i el món.

Títol I: Disposicions Generals

Capítol primer: objecte i àmbit de l'Ordenança.

Article 1. La present ordenança té per objecte regular l'actuació de l'Administració municipal en relació amb les activitats privades que afectin els àmbits personals i dels béns i que tinguin transcendència en l'aspecte públic i de convivència ciutadana, determinant els drets de les autoritats locals en relació amb la competència municipal i amb els interessos generals del veïnat.

Article 2. L'àmbit territorial de l'Ordenança es circumscriu al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

Capítol segon: drets i deures dels habitants.

Article 3. Els habitants del terme exerceixen els drets reconeguts per la legislació vigent i en la present Ordenança. El municipi, en l'àmbit de les seves competències vetllarà especialment pels drets dels seus ciutadans en les matèries de competència municipal, així com qualsevol altres de legítim exercici per part de les entitats locals que es considerin d'interès general.

Article 4. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, articulant, a través de les actuacions administratives que siguin procedents, els mitjans necessaris perquè els ciutadans i les seves organitzacions estiguin suficientment informades de l'activitat municipal i puguin participar en l'e-laboració de projectes d'interès general. Les peticions d'informació hauran de ser suficientment raonades, llevat que es refereixin a obtenció de certificacions d'acords o resolucions.

Article 5. A través de les normes que consideri convenient, l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia promourà el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, els facilitarà la més àmplia informació sobre les seves activitats i, dins de les seves possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a ajudes econòmiques per a la realització de les seves activitats, i impulsarà la seva participació en la gestió de la corporació, sense menyscar les competències i facultats de decisió dels seus òrgans propis de govern.

Article 6. Tots els habitants del municipi estaran obligats per les normes i disposicions contingudes en la present ordenança. Igualment afectaran, en allò que resulti d'aplicació, tota persona que es trobi en el municipi.

Article 7. Tot espanyol o estranger que visqui habitualment en el territori municipal hi haurà de figurar empadronat. Quan la residència es tingui en més d'un municipi, la inscripció en el padró es realitzarà en el que habiti més temps a l'any.

Article 8. A part dels deures que s'assenyalen en la legislació vigent, tots els habitants del municipi i persones que s'hi trobin, estan obligats:

a) a prestar obediència i acatament, respecte i consideració a l'autoritat municipal, als seus delegats, agents i policies locals en l'exercici de les seves funcions.

b) a complir les disposicions que els afectin contingudes en aquesta ordenança, bans de l'Alcaldia i resta d'ordenances o reglaments municipals.

c) a col·laborar amb les autoritats sanitàries en les mesures que s'adoptin per prevenir la propagació de malalties contagioses i evitar perjudicis a la salut pública.

d) a presentar l'oportú auxili als seus conciutadans i als agents de l'autoritat quan els ho demanin o quan sigui evident que ho necessiten, en casos extrems o de calamitat pública.

Article 9. Els propietaris d'immobles afectats per la col·locació dels rètols que continguin els noms dels carrers, places i resta de vies públiques, plaques de numeració d'edificis, indicadors de normes de circulació o de referència a un servei públic, estan obligats a permetre i suportar que s'hi puguin fixar, així com a respectar-ne la permanència i visibilitat.

També estan obligats a permetre la instal·lació, a les seves parets i façanes, o als tancats, dels elements que calguin i siguin necessaris per a l'estesa de les línies de subministrament o dels diferents serveis públics de competència municipal establerts o que s'estableixin.

Capítol tercer: normes generals de convivència ciutadana.

Article 10. L'actuació personal dins dels àmbits públic i privat, per respecte a la convivència normal ciutadana, ha de tenir com a límit el punt a partir del qual es puguin produir perturbacions o molèsties a tercers.

Article 11. Són d'especial aplicació les normes d'aquesta Ordenança a tota manifestació de conducta contrària a la normal convivència ciutadana que es produeixi en el terme municipal, amb imputació de les responsabilitats directes i subsidiàries establertes en les normes de dret comú.

Quan el menyspreu a les normes de convivència i respecte degut a les persones sobrepassi els límits i àmbit d'aquesta ordenança, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent.

Article 12. Serà sancionable tota conducta o fet individual que vagi en contra de les bones formes, ordre i urbanitat exigible per la convivència social, no es permetran crits, bregues o baralles i, en general, qualsevol conducta que doni o pugui donar lloc a molèsties als ciutadans.

Capítol quart: seguretat en els espais públics.

Article 13. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia participarà en el manteniment de la seguretat pública en els termes establerts en la Llei reguladora de les bases de règim local i en el marc de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, i normativa que les desenvolupi o substitueixi.

Article 14. Sense perjudici del que pugui establir-se en el Reglament propi del cos, la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, pel que fa a la seva relació amb els ciutadans, es cuidarà especialment:

a) de l'ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nucli urbà, d'acord amb l'establert en les normes de circulació, i instruir els atestats per accidents de circulació que ocorrin dins del nucli urbà.

b) de la policia administrativa relativa a compliment d'ordenances, bans i resta de disposicions municipals.

c) de prestar els auxilis necessaris en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública.

d) de realitzar totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius.

e) de cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits per a això.

f) d'impedir, en l'exercici de la seva actuació professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.

g) d'auxiliar i protegir els ciutadans sempre que les circumstàncies ho aconsellin o siguin requerits per a això, observant en tot moment un tracte correcte i acurat en les seves relacions amb aquests.

h) d'aquelles altres que li siguin atribuïdes o li puguin ser atribuïdes per la legislació vigent en cada moment.

Article 15. A l'efecte de garantir la deguda seguretat en els llocs públics, a més de les normes del Reglament de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, els locals d'espectacles, teatres, cines, camps d'esport, establiments d'hosteleria i restauració i similars, hauran de complir allò preceptuat en la legislació especial que els regula, tant en el moment de la seva instal·lació o inauguració com en el seu posterior funcionament.

Article 16. Els propietaris o titulars dels establiments públics, en especial bars, cafeteries i similars, seran responsables del bon ordre en el seu establiment.

A aquest efecte, queden obligats a:

-no facilitar begudes alcohòliques a aquelles persones que, notòriament, es trobin en estat d'embraguesa.

-no facilitar begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

-no subministrar menjars o begudes de qualsevol classe fora de l'àmbit de l'establiment, s'entén per àmbit de l'establiment l'interior del local i, si és el cas, la seva terrassa, mai la vorera, via pública o espais públics; tot això llevat de l'existència de llicència municipal per a utilització privativa de zones de domini públic.

-evitar que els clients surtin a la via pública portant gots o ampolles de vidre.

Article 17. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia podrà obligar aquells establiments en els quals de forma habitual i reiterada es produeixin alteracions de l'ordre, a establir un servei especial de vigilància i ordre, dedicat únicament i exclusivament a aquesta finalitat, sense perjudici que puguin sol·licitar la col·laboració de la Policia Local per evitar els casos de gamberrisme i altres alteracions de l'ordre que puguin donar-se en els seus establiments.

Capítol cinquè: organització i autorització dels actes públics.

Article 18. Organització i autorització dels actes públics.

1. Els organitzadors d'actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin en cada cas per l'òrgan competent. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar.

2. Els organitzadors d'actes públics han de vetllar perquè els espais públics utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics. En cas de deteriorament, els organitzadors resten obligats a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.

3. L'Ajuntament podrà denegar l'autorització per a la celebració d'esdeveniments festius, musicals, culturals, esportius o d'indole similar en els espais públics on es pretenguin realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades en l'expedient, els esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l'acte.

4. Quan es tracti de l'exercici del dret fonamental de reunió i manifesta-

ció, reconegut a l'article 21 de la Constitució, i d'acord amb allò que es disposa a l'article 9.2 de la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat en el qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que, si és el cas, puguin desaconsellar la celebració de l'acte o esdeveniment en l'espai públic previst pels seus organitzadors, a fi que l'autoritat governativa competent adopti la decisió que correspongui.

Títol II: Normes de conducta en l'espai públic, infraccions, sancions i intervencions específiques.

Capítol primer: atemptats contra la dignitat de les persones.

Article 19. Fonaments de la regulació.

Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament, constitucional i legal, en la necessitat d'evitar en l'espai públic totes les pràctiques individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, així com les practiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables.

Article 20. Normes de conducta.

1. Resta prohibida en l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o conductes anàlogues.

2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o s'adrecin contra persones grans, infants i persones amb discapacitats.

3. En concret, es prohibeixen les actituds d'assetjament entre menors en l'espai públic. Estaran especialment perseguides les conductes d'agressió o setge a menors realitzades per grups de menors que actuïn en l'espai urbà.

4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les conductes descrites en els apartats anteriors, els organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat.

Article 21. Règim de sancions.

1. Tret que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent tindrà la consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable.

2. Sense perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d'infraccions greus, que es sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500 euros, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article precedent. Si les esmentades conductes fossin realitzades per grups de persones, s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets i participessin, activament o passivament, en la realització de les conductes antijurídiques previstes a l'article anterior.

Capítol segon: degradació visual de l'entorn urbà.

Article 22. Fonaments de la regulació.

1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornat.

2. Sense perjudici d'altres infraccions ja previstes en altres ordenances, els grafitis, les pintades i d'altres conductes d'embrutiment i enlletgiment no només devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, tot afectant la qualitat de vida dels veïns o veïnes i visitants.

3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en l'evitació de la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat.

Article 23.- Grafitis, pintades i altres expressions gràfiques.

1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l'espai públic, així com a l'interior o l'exterior d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal.

2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, també, l'autorització expressa de l'Ajuntament.

3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, conductes de degradació visual de l'espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es produeixen les conductes descrites en l'apartat primer d'aquest article, els organitzadors dels actes ho hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat.

4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en aquest article comeses pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que consti dol, culpa o negligència, tot incloent la simple inobservança.

Article 24. Règim de sancions.

1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció més greu.

2. Tindran la consideració d'infracció greu, sancionable amb multa de 750,01 a 1.500 euros, les pintades o els grafitis, quan s'atempti especialment l'espai urbà pel fet de realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats.

Article 25. Intervencions específiques.

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat destruiran els materials o mitjans emprats.

2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat comminaran personalment la persona infractora perquè procedeixi a la seva neteja, sense perjudici de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les despeses que comporti la neteja o reparació, sense perjudici també de la imposició de les sancions escaients.

4. Si les persones infractores són menors, es faran els tràmits adients i necessaris per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 4 de l'article 23.

5. Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció patrimonial prevista en l'article 626 del Codi penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador.

Capítol tercer: juguesques.

Article 26. Fonaments de la regulació.

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels legítims drets dels usuaris o usuàries de l'espai públic, sobretot dels col·lectius especialment protegits, com ara els menors.

Article 27. Normes de conducta.

És prohibit a l'espai públic l'oferiment de juguesques que comportin apostes amb diners o béns, llevat d'autorització específica.

Article 28. Règim de sancions.

1. Tindrà la consideració d'infracció greu, i es sancionarà amb multa de 750,01 a 1.500 euros, l'oferiment de juguesques que impliquin apostes de diners o béns, i en qualsevol cas, l'anomenat joc de triler.

Article 29. Intervencions específiques.

Si la infracció consisteix en l'oferiment de juguesques a l'espai públic, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així com dels que siguin fruit de la conducta infractora.

Capítol quart: utilització de l'espai públic urbà per a l'oferiment i demanda de serveis sexuals.

Article 30. Fonaments de la regulació.

1. El Tribunal de Justícia d'Estrasburg en data 20 de novembre de 2001 defineix la prostitució, no com un delicte, sinó com una activitat econòmica sempre que aquesta es realitza de forma independent i autònoma, i com a tal activitat econòmica queda supeditada a l'obtenció de llicència municipal.

2. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar els residents de Sant Josep de sa Talaia de l'exhibició de pràctiques d'oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs de trànsit públic, i prevenir l'exploatació de determinats col·lectius.

3. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l'ocupació de l'espai públic, i es dicta tenint en compte els títols competencials municipals i els béns jurídics protegits previstos en el punt 2.

Article 31. Normes de conducta.

1. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, es prohibeix

oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts en l'espai públic.

2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l'oferiment, la sol·licitud, la negociació o l'acceptació de serveis sexuals en l'espai públic, quan aquestes conductes es duiguin a terme en llocs situats a menys de dos-cents metres de recintes esportius, parcs infantils, centres docents o educatius en els quals s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en qualsevol dels seus nivells i cicles, o parcs on s'hi ajunten infants o grups de joves.

3. Igualment, és absolutament prohibit mantenir relacions sexuals mitjançant o sense retribució en l'espai públic.

Article 32. Règim de sancions.

1. Els agents de l'autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos en els articles anteriors, podran denunciar aquestes persones sempre que desenvolupin algunes de les pràctiques prohibides per la present Ordenança. Si la persona persisteix en la seva actitud i no abandonés el lloc, podrà ser denunciat per desobediència a l'autoritat. També podrà ser denunciada la persona per desobediència als agents de l'autoritat, quan coneixent les prohibicions recollides en l'article anterior, no les respecti encara que les realitzi en dates o llocs diferents en els quals varen ser informats i/o denunciats.

2. Les conductes recollides en l'apartat 1 i 3 de l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran sancionables amb multa de fins a 750 euros.

3. Les conductes recollides a l'apartat 2 de l'article anterior tindran la consideració de molt greus, i seran sancionables amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

Article 33. Intervencions específiques.

1. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través dels serveis socials competents, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que exerceixin la prostitució en espais públics i vulguin abandonar l'exercici d'aquestes pràctiques.

2. Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, si és el cas, informaran totes les persones que ofereixen serveis sexuals retribuïts en espais públics sobre les dependències municipals i els centres d'atenció institucional o de caràcter privat (associacions, ONG, etc.), als quals podran acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar aquestes pràctiques.

3. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia col·laborarà intensament en la persecució i repressió de les conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones, que es puguin cometre en l'espai públic. En especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol altra forma d'exploatació sexual, i, molt especialment, pel que fa als menors i persones amb discapacitat.

Capítol cinquè: necessitats fisiològiques.

Article 34. Fonaments de la regulació.

És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la salubritat, el dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme.

Article 35. Normes de conducta.

1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar i altres anàlogues, en qualsevol dels espais públics d'aquest municipi, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització d'aquelles necessitats.

2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l'apartat anterior, quan es realitza en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, o monuments o edificis de catalogació especial, o edificis institucionals o administratius.

Article 36. Règim de sancions.

1. La conducta descrita en l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 750 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu.

2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta descrita en l'apartat 2 de l'article precedent.

Capítol sisè: consum de begudes alcohòliques.

Article 37. Fonaments de la regulació.

La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat, l'ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d'altres béns com ara la competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries.

Article 38. Normes de conducta.

1. No es permet el consum de begudes alcohòliques en els espais públics, llevat de les autoritzacions que es puguin atorgar en casos puntuals.

2. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrita a l'apartat 1 d'aquest article quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests efectes, l'esmentada alteració es produeix quan, segons apreciació de l'autoritat municipal o dels seus agents, concorri algun dels supòsits següents:

a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l'aglomeració d'aquests.

b) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l'entorn o provocar-ne situacions d'insalubritat.

c) Quan el consum s'exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d'usuaris dels espais públics.

d) Quan els llocs es caracteritzin per l'afluència de menors o la presència d'infants i adolescents.

3. Llevat que hi hagi autorització municipal específica per a l'expedició de begudes, els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la seva celebració les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les conductes descrites en els dos apartats anteriors, els organitzadors dels actes ho comunicaran immediatament als agents de l'autoritat.

4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, tutors o tutores, guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que consti culpa o negligència per la seva part.

5. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, si és el cas, en les papereres situades a l'espai públic. Queda prohibit llençar al terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llauenes, ampolles, gots, o qualsevol altre objecte.

Article 39. Règim de sancions.

1. La realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva d'una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 750 euros, tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu.

2. La realització de la conducta descrita en l'apartat 5 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 750 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu.

3. Constitueix infracció greu, que es sancionarà amb multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a l'apartat 2 de l'article precedent.

Article 40. Intervencions específiques.

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat destruiran les begudes, els envasos o els altres elements objecte de les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons higiènico-sanitàries.

2. Si les persones infractores són menors, es practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 4 de l'article 38, per tal de procedir, també, a la seva denúncia.

3. Per garantir la salut de les persones afectades pel consum d'alcohol, així com per evitar molèsties greus als ciutadans i ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan s'escaigui, podran sol·licitar la participació dels serveis sanitaris corresponents.

Capítol setè: comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i altres productes.

Article 41. Fonaments de la regulació.

Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la protecció de la salubritat, l'ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, a més, si és el cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en l'economia de mercat i els drets de consumidors i usuaris.

Article 42. Normes de conducta.

1. És prohibida la venda ambulant en l'espai públic de qualsevol tipus d'aliments, begudes i altres productes, llevat de les autoritzacions específiques.

2. Queda prohibit col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar, guardar, vigilar el gènere o alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat.

3. Els organitzadors de qualsevol acte públic, reunió, activitat cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les conductes descrites en els apartats anteriors, els organitzadors dels actes ho comunicaran immediatament als agents de l'autoritat.

Article 43. Règim de sancions.

1. Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descri-

tes en els apartats de l'article precedent són constitutives d'infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins a 750 euros.

Article 44. Intervencions específiques.

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, quan es tracti d'articles peribles, els agents de l'autoritat retiraran i destruiran el gènere.

La resta de béns intervinguts quedaran dipositats a les dependències municipals a disposició del seu propietari, que podrà retirar-los amb el pagament previ de la corresponent sanció i suficient justificació de la propietat; si transcorreguts deu dies des de la intervenció d'aquests, no haguessin estat retirats pels seus legítims propietaris, seran destruïts o entregats a associacions sense ànim de lucre.

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d'il·lícit penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l'article 107 d'aquesta Ordenança.

3. La utilització de mitjans de transport, per a l'emmagatzemament i/o trasllat dels productes objecte de comerç, podran suposar la retirada i intervenció cautelar del vehicle en els termes establerts en la present Ordenança.

Capítol vuitè: activitats i prestació de serveis no autoritzats, demanda i consum d'aquests.

Article 45. Fonaments de la regulació.

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l'ús racional, ordenat i propi de les vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o pertorbades en l'exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda de la seguretat pública, a més, si és el cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de consumidors i consumidors i usuaris i usuàries.

Article 46. Normes de conducta.

1. Es prohibeix la realització d'activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l'espai públic, com ara el tarot, vidència, massatges, tatuatges i altres activitats anàlogues.

2. Queda prohibit col·laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat.

3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les conductes descrites, els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat.

4. La realització d'aquestes activitats als espais públics requerirà d'autorització prèvia municipal.

Article 47. Règim de sancions.

1. Sense perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en els apartats de l'article precedent seran constitutives d'infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.

Article 48. Intervencions específiques.

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelament el gènere o elements objecte de les prohibicions, i els materials o els mitjans emprats.

Si es tracta d'aliments o béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la infracció penal d'estafa, tipificada en els articles 248 a 251 i 623.4 del Codi penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l'article 107 d'aquesta Ordenança.

Capítol novè: ús impropï de l'espai públic.

Article 49. Fonaments de la regulació.

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús racional i ordenat de l'espai públic i els seus elements, a més, si s'escau, de la salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.

Article 50. Normes de conducta.

1. Queda prohibit fer un ús impropï dels espais públics i els seus elements, de manera que n'impedeixi o dificulti la utilització per a la resta d'usuaris.

2. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:

a) acampar a les vies i als espais públics o privats d'ús públic en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs concrets. No és permès tampoc dormir de dia o de nit en aquests espais. Quan es tracti de persones en situació d'exclusió social, s'estarà en allò que es preveu a l'article 52.2 d'aquesta Ordenança.

b) utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats, igualment s'inclourà l'ocupació de mobiliari o parts de la via en què s'afecti o pugui afectar-se la seguretat i convivència ciutadana.

c) rentar-se o banyar-se a les fonts, als estanys o similars.

d) rentar roba a les fonts, als estanys, a les dutxes o similars.

e) utilitzar els senyals de trànsit, fanals o similars per aparcar bicicletes o motos.

f) els camions dedicats a la neteja de fosses sèptiques, sempre que treballin en zones turístiques o comercials, hauran de realitzar la seva activitat en horari nocturn (de les 24 h fins a les 7 h) per tal de perjudicar i molestar tan poc com es pugui els comerços i els seus clients. A les zones residencials, en canvi, aquesta activitat es realitzarà en horari diürn (de 8 a 20 hores).

Article 51. Règim de sancions.

La realització de les conductes descrites en l'article precedent és constitutiva d'infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros.

Article 52. Intervencions específiques.

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelament el gènere, els materials i els mitjans emprats.

2. Els serveis municipals adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions públiques i, si ho estimés necessari per raons de salut, acompanyarà aquestes persones a l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-les o ajudar-les en allò que sigui possible. En aquest cas no s'imposarà la sanció prevista.

3. En els supòsits previstos a l'article 50.2.a) en relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els agents de l'autoritat informaran, si n'hi ha, sobre els llocs municipals habilitats per a l'estacionament d'aquests vehicles.

4. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, descrita a l'apartat a) de l'article 50.2 de la present Ordenança, i la persona infractora no acreditada la residència legal en territori espanyol, l'agent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, si no es disposa el seu import, es procedirà a la immobilització del vehicle i, si és el cas, a la seva retirada i ingrés al dipòsit municipal.

Capítol desè: activitats vandàliques en l'ús del mobiliari urbà.

Article 53. Fonaments de la regulació.

Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeix l'ús racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat física de les persones o el patrimoni municipal.

Article 54. Normes de conducta.

1. Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns.

2. Queden prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o de les seves instal·lacions o dels elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana previstes a l'apartat 1 anterior.

3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen en l'espai públic les conductes descrites en els dos apartats anteriors, els organitzadors dels actes ho hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat.

4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors dels quals depenguin els menors, seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que hi consti culpa o negligència per part d'aquells.

Article 55. Règim de sancions.

1. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent són constitutives d'infracció molt greu, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

2. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, els actes de deteriorament descrits a l'apartat 2 de l'article precedent són constitutius d'infracció greu, i es sancionaran amb multa de 750,01 a 1.500 euros.

Article 56. Intervencions específiques.

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si escau, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelament els materials, el gènere, o els mitjans emprats.

2. Si la persona infractora és un menor, es practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren indicis circumstancials previstes en l'apartat 4 de l'article 54, per tal de procedir, també, a la seva denúncia.

3. Quan la presència estàtica de grups de persones, atesa la seva actitud incívica, pugui alterar la seguretat, la convivència i es vegin afectats béns públics o privats, podrà procedir-se a la privació del dret a la permanència en el lloc objecte de conflicte.

La privació del dret a la permanència en les zones privades, descrites en el paràgraf anterior, únicament podrà executar-se prèvia denúncia del titular de bé afectat.

Capítol onzè: venda de vehicles de segona mà a la via pública.

Article 57. Fonaments de la regulació.

La venda d'automòbils de segona mà, mitjançant la seva exhibició a la via pública, està mancada de regulació en el nostre ordenament jurídic, de manera que el que hauria d'ésser un contracte de compravenda entre particulars es converteix en un negoci, fet que dona lloc a la pèrdua de la seva condició privada per convertir-se en una activitat sotmesa a controls de poders públics, fet pel qual s'han d'exigir les garanties que el dret mercantil imposa als seus comerciants, per tal de garantir els drets dels consumidors, així com la identitat dels venedors als efectes dels diversos controls administratius imposats per la legislació vigent.

Article 58. Normes de conducta.

Es prohibeix la venda de vehicles amb el cartell 'es ven' que romanguin estacionats a la via pública.

Article 59. Règim de sancions.

L'incompliment d'aquest article es considera una infracció lleu, que serà sancionada amb multa de fins a 750 euros.

Article 60. Intervencions específiques.

Els vehicles que incompleixen l'ordenança seran retirats pel servei de grua municipal, per la qual cosa els seus propietaris es faran càrrec del pagament de les taxes corresponents.

Capítol dotzè: altres conductes que dificultin la convivència ciutadana.

Secció 1: zones naturals, espais verds i platges

Article 61. Fonaments de la regulació.

És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels parcs i jardins, els parcs forestals, les plantacions i els espais verds privats, així com garantir la seguretat de les persones i el manteniment de les platges, exceptuant les zones especialment protegides per altres normatives.

Igualment s'estableix la responsabilitat del titular d'immobles d'impedir l'ocupació excessiva per part de la vegetació que pugui existir a la seva propietat, de produir molèsties o alterar la seguretat dels usuaris de la via pública, ja sigui dificultant la circulació dels vianants, la circulació o la visibilitat del traçat o de la senyalització viària.

L'accés i la circulació de les motocicletes i dels automòbils en els parcs, jardins i platges està prohibit llevat dels vehicles autoritzats i dels vehicles dels serveis municipals.

Article 62. Normes de conducta.

1. La seguretat a les platges i especialment en les activitats a la mar, exigeixen l'observació de les indicacions que es donin i el respecte de les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de bany.

2. La bandera verda indica l'absència de perill, la qual cosa permet una activitat normal a la platja. Amb bandera groga s'hauran d'extremar les precaucions a l'aigua. La bandera vermella significa la prohibició del bany.

3. És prohibit el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no es permet el bany o el pas està restringit.

4. També es prohibeix utilitzar sabó o altres elements d'higiene a les dutxes públiques de les platges.

Article 63. Règim de sancions.

1. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors constituirà una infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros.

Secció 2: contaminació acústica i altres activitats.

Article 64. Fonaments de la regulació.

Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d'acord amb allò que disposen els articles 15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi ambient adequat i a la protecció de la salut previstos en els articles 43 i 45 del mateix text constitucional.

Subsecció 1.- Actuacions musicals al carrer.

Article 65. Requisits de les llicències.

a) Les actuacions musicals al carrer requereixen llicència i per obtenir-la s'haurà de presentar a l'Ajuntament juntament amb la sol·licitud una memòria

explicativa en la qual faran constar:

- descripció de l'activitat a realitzar.
- emplaçament sol·licitat.
- instruments a utilitzar.
- si compta o no amb amplificacions.
- si compta amb instruments de percussió.
- horari de les actuacions.

Presentada al Registre de l'Ajuntament la sol·licitud, s'entendrà concedida a precari i l'Alcaldia podrà resoldre la seva limitació o prohibició en atenció a l'interès públic.

b) Les actuacions es faran en espais públics d'amplada superior a 7 metres, i sempre que no produeixin dificultats al trànsit o impedeixin l'ús normal de la via pública.

c) Les actuacions es faran en l'horari comprès entre les 18.00 i les 23.00 hores i no hauran de tenir una durada superior als 30 minuts. A més, amb independència de qui les realitzi, mai no podran superar el temps total de 2 hores en un dia en una mateixa ubicació.

d) Les actuacions no hauran de confrontar amb centres docents, hospitals, clíniques o residències assistides ni terrasses o vetlladors.

Subsecció 2.- Mims, estàtues humanes i figures d'arena.

a) Aquest tipus d'actuacions requereixen llicència municipal sense perjudici de qualsevol altra exigida pels altres organismes.

Per a l'obtenció de l'abans esmentada llicència haurà de presentar una memòria explicativa en la qual faran constar.

- descripció de l'activitat.
- emplaçament sol·licitat.
- horari de les actuacions o permanència en el lloc.

Presentada al Registre de l'Ajuntament la sol·licitud, s'entendrà concedida a precari i l'Alcaldia podrà resoldre la seva limitació o prohibició en atenció a l'interès públic.

b) Les actuacions es faran en espais públics d'amplada superior a 7 metres i sempre que no produeixin dificultats al trànsit o posin impediment a l'ús normal de la via pública.

c) Les actuacions es faran en l'horari comprès entre les 18 i les 24 hores, excepte les estàtues d'arena que no tindran, en principi, limitació horària.

d) Les actuacions en cap cas podran produir molèsties als veïns o usuaris de les vies públiques on es realitzin.

Article 66. Règim de sancions.

Qualsevol incompliment dels apartats anteriors serà sancionat amb multa de fins a 750 euros i podrà comportar la retirada de la llicència.

Títol III: Tinença d'animals

Capítol primer: cans

Article 67. Els propietaris de cans estan obligats a declarar-los a les oficines municipals per formalitzar-ne l'oportuna matrícula, en la qual també seran inscrits d'ofici els cans no declarats, dels quals es conegui la seva existència.

Article 68. Els qui cedissin algun d'aquests animals a una altra persona dins del terme municipal, hauran de donar compte a les oficines municipals del nom del nou posseïdor i del seu domicili.

Article 69. La circulació de cans per la via pública haurà de realitzar-se conduint-los els seus propietaris amb cadena o cordó resistent, i en els supòsits d'animals catalogats com a potencialment perillosos o de caràcter actiu, morrió que els impedeixi mossegar. També amb referència als perillosos, l'animal haurà d'anar acompanyat per una persona capaç de dirigir-lo.

Dels danys causats pels cans seran responsables els seus propietaris.

Article 70. Els animals que es trobin amollats a les vies públiques seran recollits pels serveis municipals i dipositats en els locals habilitats a l'efecte, a disposició dels seus propietaris, els quals podran retirar-los un cop n'hagin justificat la seva pertinença, abonant les despeses de manutenció, la taxa establerta, si és el cas, i la multa corresponent.

Transcorregut el termini de deu dies sense ser reclamats pels seus legítims propietaris, segons la classe d'animal de què es tracti, possibilitat de manteniment, disponibilitat de mitjans, valor de l'animal o altra circumstància que l'autoritat municipal estimi oportú considerar, determinarà l'entrega a entitats, institucions protectores d'animals o persones interessades. Tot això sense perjudici de les mesures especials que per raons sanitàries siguin necessàries.

Article 71.

1. Tots els cans hauran d'estar degudament vacunats contra la ràbia.
2. Els cans sospitosos de ràbia i els que en morir permetin suposar aquesta malaltia hauran de ser conduïts perquè els examini al veterinari titular.
3. Sempre que sigui possible, i especialment en cas d'agressió, s'haurà de respectar la vida dels animals per facilitar el diagnòstic i només es justificarà el

seu sacrifici quan existeixi perill imminent.

4. Els qui hagin estat mossegats per un ca, hauran de comunicar-ho immediatament als serveis sanitaris perquè se'ls pugui sotmetre a tractament, si així ho aconsellés el resultat de l'observació animal.

5. Les persones que amaguessin a la Inspecció Municipal algun cas de ràbia o deixessin l'animal que la pateixi en llibertat de causar danys, seran posats a disposició dels tribunals de justícia, a l'efecte de l'article 600 del Codi penal.

6. La tinença de cans i altres animals domèstics, que a causa dels seus lladrucs continuats o altres sons pertorbi el normal descans dels ciutadans, serà corregida mitjançant la imposició de la sanció que correspongui.

Capítol segon: animals domèstics.

Article 72. Queda prohibit l'abandó d'excrements que puguin produir els cans, gats i altres animals a les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública. Els propietaris o portadors dels animals estan obligats, sota la seva exclusiva responsabilitat, a la immediata recollida dels excrements que poguessin produir-se mitjançant la utilització d'artefactes o embolcalls que permetin recollir-los i guardar-los de manera hermètica, i a dipositar-los de manera higiènicament acceptable en els contenidors o recipients de residus sòlids urbans. Aquests embolcalls, els hauran de dur amb ells els portadors d'animals, i la Policia Local podrà comprovar en tot moment si es compleix amb aquesta obligació. Serà motiu de sanció passejar un animal sense comptar-hi.

Article 73. La tolerància d'animals domèstics en general estarà condicionada a la utilitat o nocivitat d'aquests en relació amb les persones, a les circumstàncies higièniques del seu allotjament i a la possible existència de perills i incomoditats per als veïns en general.

Article 74. Amb informe previ dels serveis veterinaris, l'autoritat municipal, tenint en compte les condicions esmentades en l'article anterior, en cada cas podrà decidir el que sigui procedent, segons l'informe que emetin els esmentats serveis veterinaris com a conseqüència de les visites domiciliàries, que els hauran de ser facilitades.

Article 75. La tinença d'aus de corral, conills i coloms es subjectarà a les exigències necessàries per prevenir possibles focus d'infecció i a les ordenances d'edificació quant a les zones en què estiguin permeses.

En tot cas hauran de complir les següents condicions:

a) Que es tracti d'animals destinats exclusivament al consum familiar o que, en cas de tractar-se de la cria de coloms missatgers, estigui degudament autoritzat a aquests efectes el seu propietari.

b) Que els locals destinats a la seva tinença reuneixin les condicions tècniques adequades, d'acord amb l'informe dels serveis veterinaris, i que es trobin separats i independents dels habitatges i a una distància no menor de cinc metres d'aquestes, i es compleixin les exigències sanitàries i higièniques pertinents.

En cap cas es permetrà la tinença dels animals esmentats en els apartats anteriors en patis interiors.

Article 76. Els animals no tolerables hauran de ser desallotjats pels seus propietaris, i si aquests no ho fessin després de requerits en forma, els seran decomissats.

Article 77. Els gats i resta d'animals domèstics, així com les cavalleries i altres de gran talla que causessin lesions a persones, els quals haguessin estat mossegats per cans o fossin sospitosos de patir la ràbia, hauran de sotmetre's a observació i diagnòstic dels serveis veterinaris municipals perquè els apliquin el tractament que sigui procedent.

Article 78. Es prohibeix fustigar i castigar els animals, i en general donar-los tracte violent amb el qual els ocasionin patiments cruels o innecessaris. Totes les persones que presenciïn fets contraris a aquesta disposició tendran el deure de denunciar els infractors, perquè se'ls imposi el corresponent correctiu.

Article 79. Règim de sancions.

Qualsevol incompliment dels apartats anteriors serà sancionat amb multa de fins a 750 euros.

Títol IV: Remors i olors

Article 80. Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar la producció de remors i olors que alterin la convivència normal.

Article 81. Sense perjudici de la reglamentació especial vigent en matèria d'instal·lacions industrials i vehicles de motor, d'espectacles públics i de protecció del medi ambient o qualsevol altra activitat generadora de remors, es prohibeix l'emissió de qualsevol remor domèstica que pel seu volum o horari excedeixi dels límits que exigeix la tranquil·litat pública així com l'emissió d'olors molestos o perjudicials per a les persones.

Article 82. Els conductors i ocupants de vehicles s'abstindran de posar a elevada potència els aparells reproductors de so quan circulin o estiguin parats/estacionats.

Article 83. Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i tota classe d'articles pirotècnics que puguin produir remors o incendis sense autorització prèvia de l'Administració.

Article 84. Règim sancionador.

1. Les accions o omissions que en relació amb allò que disposa el present títol produeixin molèsties o atemptin contra la normal convivència ciutadana, comportaran la sanció de fins a 750 euros en el cas d'infraccions lleus, que seran les comeses en horari diürn, i de 750,01 a 1.500 euros en els supòsits d'infraccions greus, que seran les comeses en horari nocturn, amb excepció d'allò que disposa l'article 80, considerades sempre lleus.

2. S'entendrà per horari diürn la franja horària disposada entre les 08 i les 22 hores, i horari nocturn l'existent entre les 22 i les 08 hores.

Article 85. Intervencions específiques.

Quan en la comissió de les infraccions descrites en el present títol intervinguin aparells reproductors de so, aquests podran ser intervinguts per part dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions, quedaran sota la seva custòdia en els termes establerts en la present Ordenança. Així mateix podran procedir a la incautació d'altres elements amb iguals finalitats.

Títol V: Disposicions comunes sobre mesures d'aplicació.

Capítol primer: disposicions generals.

Article 86. Decrets i instruccions de l'alcalde o alcaldessa en el desenvolupament i aplicació de l'Ordenança.

Mitjançant Decret d'Alcaldia s'aprovarà un manual operatiu sobre les qüestions que planteja l'aplicació d'aquesta Ordenança, en el qual es desenvoluparan i concretaran les actuacions dels diversos òrgans i agents municipals implicats.

Article 87. Funcions de la Policia Local.

La Policia Local és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta Ordenança, de denunciar, quan s'escaigui, les conductes que en siguin contràries, i d'adoptar, si és el cas, les altres mesures d'aplicació.

Article 88. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança.

1. Totes les persones que viuen a Sant Josep de sa Talaia tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o amb els seus agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme a l'espai públic.

2. A efectes de l'establert a l'apartat anterior, l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia posarà els mitjans necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de col·laboració, qualsevol persona pugui posar en coneixement de les autoritats municipals els fets dels quals s'hagin assabentat i que siguin contraris a la convivència ciutadana o al civisme.

3. D'acord amb el que es preveu a la Llei orgànica 1/1996, de protecció del menor, tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims qualsevol situació que detectin de risc o desempara d'un menor. Així mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que s'assabentin que un menor no està escolaritzat o no assisteix al centre escolar de manera habitual, han de posar-ho en coneixement dels agents més pròxims o de l'autoritat competent, a l'efecte que s'adoptin les mesures pertinents.

Article 89. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme.

1. Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos em l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:

a) la negativa o la resistència a les tasques d'inspecció o control de l'Ajuntament.

b) la negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels funcionaris actuants en compliment de les seves funcions.

c) subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d'inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.

d) l'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals o els seus agents.

2. Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l'apartat anterior són constitutives d'infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

Article 90. Elements probatoris dels agents de l'autoritat.

1. En els procediments sancionadors que s'instrueixen en aplicació d'aquesta Ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte, sense perjudici d'altres proves que puguin aportar els interessats.

2. Als expedients sancionadors que s'instrueixen, i amb els requisits que corresponguin d'acord amb la legislació vigent, s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits en la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s'escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el principi de proporcionalitat.

Article 91. Denúncies ciutadanes.

1. Sense perjudici de l'existència d'altres interessats a part del presumpte infractor, qualsevol persona, en compliment de l'obligació prevista a l'article 88, pot presentar denúncies per posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que pugui ser constitutiu d'una infracció de l'establert en aquesta Ordenança.

2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptivament responsables.

3. Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciat la iniciació o no de l'esmentat procediment i, si és el cas, la resolució que hi recaigui.

4. Prèvia ponderació dels riscs per la naturalesa de la infracció denunciada, l'instructor podrà declarar confidencials les dades personals del denunciant, tot garantint l'anonimat d'aquest en el transcurs de la tramitació de l'expedient administratiu. Aquesta confidencialitat serà declarada quan ho sol·liciti el denunciant.

5. Quan una persona denunciï membres rellevants de les xarxes organitzades en benefici de les quals realitza una activitat antijurídica, es considerarà que la persona denunciada no ha comès la infracció sempre que s'acrediti degudament aquesta circumstància denunciada. El mateix tractament tindrà la persona que denunciï les infraccions d'aquesta Ordenança comeses per grups de menors organitzats. En aquests casos, se'ls requerirà a no tornar realitzar aquesta activitat antijurídica.

Article 92. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores siguin no residents al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

1. Les persones denunciades hauran de comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciada, als efectes de notificació, la seva identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i adreça d'on estan allotjats al municipi si no són residents. Els agents de l'autoritat podran comprovar en tot moment si l'adreça proporcionada per la persona infractora és la correcta.

En el cas que aquesta identificació no fos possible o no fos correcta la localització proporcionada, els agents de l'autoritat, a aquest objecte, podran requerir la persona infractora que els acompanyi a dependències properes, en els termes i circumstàncies previstos a l'apartat 4 de l'article 105 d'aquesta Ordenança.

2. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, l'agent que formulï la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament efectiva la sanció, en els termes previstos a l'apartat 1. Si la sanció no fos satisfeta, l'òrgan competent mitjançant acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura cautelar l'ingrés d'una quantitat econòmica que representi el mínim de la sanció econòmica prevista. Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter urgent a l'adreça on aquella persona estigui allotjada al poble o a la localitat corresponent. En el supòsit que no es procedeixi a l'ingrés d'aquesta quantitat, se li advertirà, si s'escau, que podria incorré en responsabilitat penal.

3. En el cas que les persones denunciades no residents al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia siguin estrangeres i no satisfacin la sanció en els termes descrits, una vegada hagi finalitzat el procediment mitjançant resolució, es comunicarà a l'ambaixada o consolat corresponent i a la Direcció Insular de l'Administració de l'Estat a Eivissa i Formentera, la infracció, la identitat de la persona infractora i la sanció que recaigui, als efectes oportuns.

4. L'Ajuntament proposarà a les autoritats competents aquelles modificacions de la normativa vigent que tendeixin a facilitar i millorar l'efectivitat de les sancions que s'imposin als no residents al municipi.

5. D'acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 8.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les actuacions en matèria de recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedent de les sancions previstes en la present Ordenança, i que s'hagin d'efectuar fora del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, es regiran pels convenis que es puguin subscriure amb la resta d'administracions públiques.

Article 93. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors d'edat.

1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran principalment l'interès superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i que les seves opinions siguin tingudes en compte.

2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de l'infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l'assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà l'opinió dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores.

3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells.

4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta Ordenança, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, en aquest cas, concorri culpa o negligència per part seva.

5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica obligatòria (educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de l'edat de sis anys fins a la de setze.

6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d'edat transitin o romanguin en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la Policia Local sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i els motius pels quals no són al centre d'ensenyament, i els conduirà al seu domicili o al centre escolar on estiguin inscrits, posarà, en tot cas, en coneixement dels seus pare o mare o tutor o tutora o guardador o guardadora i de l'autoritat educativa competent, que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar.

7. Sense perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es pugui acudir a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares, o tutors o tutores o guardadors o guardadores seran responsables de la permanència dels menors a la via pública i de la no assistència d'aquests als centres educatius. En aquests casos, quan concorri culpa o negligència, els pares i mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores incorreran en una infracció lleu, i podran ser sancionats amb multa de fins a 750 euros, o si escau, acceptar les mesures previstes a l'apartat 9 d'aquest article.

8. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores.

9. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores hauran d'assistir a les sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, si és el cas, s'imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que depenguin d'ells.

Article 94. Pagament de la sanció in situ.

Les persones infractores que assumeixin d'entrada la seva culpabilitat podran fer efectiva immediatament la sanció establerta en la present Ordenança en la seva quantia mínima i amb un descompte del 30% sobre aquesta.

Article 95. Principi de prevenció.

L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic.

Article 96. Mediació.

1. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia promourà especialment la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada.

2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, i amb l'objectiu de protegir els interessos superiors del nen o nena, els serveis socials de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia establiran un sistema de mediació, que actuarà amb caràcter voluntari respecte al procediment administratiu sancionador, amb personal especialitzat al qual seran cridats a comparèixer els menors presumptivament infractors, els seus pares i mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores, així com, si s'escau, les possibles víctimes o persones afectades per les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança.

3. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia procedirà a designar mediadors o mediadores que, en qualitat de terceres persones neutrals, resoldran els conflictes de convivència ciutadana sempre que els pares i mares o tutors i tutores o guardadors o guardadores del menor acceptin que aquest se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors o guardadores, i l'administració municipal, així com, si s'escau, les víctimes de la infracció.

4. La mediació tindrà per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany causat a la comunitat i perseguirà, després d'una negociació entre les parts, un acord sobre les mesures de reparació que hauran d'adoptar-se en cada cas.

5. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter voluntari, a altres conductes i col·lectius específics. L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la persona infractora o dels serveis socials competents, reconduir el procediment sancionador a un sistema de mediació, sempre que la dimensió retributiva de la

conducta infractora sigui més eficaç a través d'aquesta via.
Capítol segon: règim sancionador.

Article 97. Graduació de les sancions.

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l'aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents:

- a) la gravetat de la infracció.
- b) l'existència d'intencionalitat.
- c) la naturalesa dels perjudicis causats.
- d) la reincidència.
- e) la reiteració.
- f) la capacitat econòmica de la persona infractora.

2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció d'aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionador per infraccions d'aquesta Ordenança.

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

4. Quan, segons el que preveu la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.

Article 98. Responsabilitat de les infraccions.

En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.

Article 99. Concurrencia de sancions.

1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa a efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.

2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la qual es refereix l'apartat anterior, als responsables de dues o més infraccions els seran imposades les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s'aprecii identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de la qual es tracti.

Article 100. Procediment sancionador.

1. Quan es tracti d'infraccions lleus comeses per estrangers no residents que afectin la convivència ciutadana en el termes d'aquesta Ordenança, i sempre que no existeixi un procediment específic en la legislació sectorial aplicable, l'agent de l'autoritat que formulï la denúncia actuarà com a instructor de l'expedient i lliurarà a la persona denunciada, en el mateix moment dels fets, una denúncia en la qual constaran els fets i els càrrecs que se li imputen per tal que, en el termini de dos dies, formulï, si s'escau, al·legacions i plantegi els mitjans de prova pertinents per a la seva defensa. Un cop transcorregut el termini de dos dies o practicada la prova corresponent, l'òrgan competent dictarà resolució en un termini màxim d'un dia i es comunicarà a la persona infractora la sanció corresponent.

2. En el procediment sancionador serà d'aplicació el Decret 14/1994, de 10 de febrer, en el qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, subsidiàriament, el que reguli la legislació de l'Estat.

3. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l'Administració de l'Ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no siguin de competència municipal, l'alcalde o alcaldessa elevarà l'expedient a l'òrgan corresponent de l'Administració que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.

Article 101. Apreciació de delictes o falta.

1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció penal, es remetrarà al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades.

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restarà fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament.

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials,

sense perjudici dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o vigència de les esmentades mesures provisionals.

Article 102. Prescripció i caducitat

La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora general, sense perjudici del que disposi la legislació sectorial.

Capítol tercer: reparació de danys.

Article 103. Reparació de danys.

1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta Ordenança no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats.

2. Als efectes de l'establert en l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabament que sigui procedent.

Capítol quart: mesures de policia administrativa.

Article 104. Ordres singulars de l'alcalde o alcaldessa per a l'aplicació de l'Ordenança.

1. L'alcalde o alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions especials que s'escaiguin sobre capteniment de la via pública o el comportament dels ciutadans i ciutadanes, per tal de fer complir la normativa en matèria de convivència ciutadana i de civisme.

2. Sense perjudici de la imposició de la sanció que, si és el cas, correspongui, l'alcalde o alcaldessa podrà també requerir les persones que siguin trobades responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta Ordenança que s'abstinguin en el futur a realitzar actuacions similars dintre del terme municipal.

3. L'incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en els apartats 1 i 2 d'aquest article seran sancionats en els termes previstos en aquesta Ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de desobediència.

Capítol cinquè: mesures de policia administrativa directa.

Article 105. Mesures de policia administrativa directa.

1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes en aquesta Ordenança, i sense perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment les persones que no respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament advertint-los que, en cas de resistència, poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència.

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació de la convivència ciutadana i el civisme, un deteriorament de l'espai públic es requerirà el seu causant que procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui possible.

3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sense perjudici del que es disposa a l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat.

4. A l'efecte de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l'autoritat requeriran la persona presumptivament responsable que s'identifiqui. De conformitat amb allò que es disposa a l'article 20 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, si la persona que ha comès una infracció no pugués ser identificada, els agents de l'autoritat podran requerir-la perquè, per tal d'iniciar l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, la persona infractora informará dels motius del requeriment d'acompanyament.

5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les normes que hagi originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat, les conductes obstruccionistes tipificades a les lletres b) i c) de l'apartat 1 de l'article 89 constitueixen una infracció independent, sancionades d'acord amb l'apartat 2 de l'esmentat article 89, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, en aquest cas es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.

Capítol sisè: mesures provisionals.

Article 106. Mesures provisionals.

1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que pugués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.

2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador.

En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses

per persones estrangeres no residents en el territori espanyol, s'hauran de tenir en compte les disposicions especials de procediment previstes a l'article 92.2 d'aquesta Ordenança.

Article 107. Comisos

1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de la infracció o que serviren, directament o indirectament, per a la seva comissió, així com els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que ho varen motivar.

2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l'han determinat.

3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient. Els objectes comissats es disposaran a disposició de l'òrgan sancionador competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.

4. El comís de l'objecte/material intervingut es prolongarà per un període de 72 hores. En el supòsit de retirada de vehicles, el titular del vehicle serà responsable de l'abonament de les despeses corresponents a la retirada i custòdia d'aquest.

Capítol setè: mesures d'execució forçosa.

Article 108. Multes coercitives.

Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives, d'acord amb el que disposa la legislació sectorial.

Disposició Addicional

Única. L'existència al municipi de Sant Josep de l'aeroport vincula aquesta administració en la prestació de serveis destinats a garantir la seguretat i convivència de les persones a l'esmentat espai. Aquesta prestació de serveis quedarà vinculada a l'existència d'acords entre les dues parts, que podran afectar tant zones públiques com privades de l'aeroport, inclosa la regulació i control del trànsit de les zones descrites.

Disposició Transitòria

Única. Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció.

Disposició Derogatòria

Única. Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Sant Josep de sa Talaia que contradiguin la present Ordenança.

Disposicions Finals

Primera. Difusió de l'Ordenança.

Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança, l'Ajuntament en farà una edició especialment preparada per ser distribuïda àmpliament en diferents punts del municipi, com ara oficines d'atenció al ciutadà, centres cívics, centres educatius, estacions d'autobusos, port i aeroport, platges, places i mercats, oficines de turisme i d'informació, hotels, pensions i establiments de pública concurrència, associacions veïnals i entitats ciutadanes, entre d'altres.

L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia implantarà un sistema de cobrament anticipat i immediat de multes i mesures provisionals amb les rebaxes pertinents a través d'un sistema automatitzat o de dispositius específics, sense perjudici que, en tot cas, el pagament pugui fer-se efectiu a través de les entitats financeres prèviament concertades.

Segona. Entrada en vigor.

La present Ordenança no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat íntegrament en el BOIB i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyalava l'article 113 de la Llei 20/06, de 15 de desembre.'

Sant Josep de sa Talaia, 17 d'agost de 2009.

L'Alcalde, Sign. Josep Marí Ribas

En el BOIB núm. 88, de 16 de junio de 2009 aparece publicado el anuncio relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno. Acabado el plazo de exposición pública sin haberse presentado alegaciones, el acuerdo hasta la fecha inicial, se entiende definitivamente aprobado, de acuerdo con lo que dispone el art. 49 de la Ley 7/85, por lo que se publica el texto íntegro de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno, que a continuación se transcribe:

'Sumario

Exposición de Motivos

Título I: Disposiciones Generales

Capítulo primero: objeto y ámbito de la Ordenanza.

Capítulo segundo: derechos y deberes de los habitantes.

Capítulo tercero: normas generales de convivencia ciudadana.

Capítulo cuarto: seguridad en los espacios públicos.

Capítulo quinto: organización y autorización de los actos públicos.

Título II: Normas de conducta en el espacio público, infracciones, sanciones e intervenciones específicas.

Capítulo primero: atentados contra la dignidad de las personas.

Capítulo segundo: degradación visual del entorno urbano.

Capítulo tercero: apuestas.

Capítulo cuarto: utilización del espacio público para la oferta y demanda de servicios sexuales.

Capítulo quinto: necesidades fisiológicas.

Capítulo sexto: consumo de bebidas alcohólicas.

Capítulo séptimo: comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos.

Capítulo octavo: actividades y prestación de servicios no autorizados, demanda y consumo de estos.

Capítulo noveno: uso impropio del espacio público.

Capítulo décimo: actividades vandálicas en el uso del mobiliario urbano.

Capítulo undécimo: venta de vehículos de segunda mano en la vía pública

Capítulo duodécimo: otras conductas que dificultan la convivencia ciudadana.

Título III: Tenencia de animales.

Capítulo primero: perros.

Capítulo segundo: animales domésticos.

Título IV: Ruidos y olores.

Título V: Disposiciones comunes sobre medidas de aplicación.

Capítulo primero: disposiciones generales.

Capítulo segundo: régimen sancionador.

Capítulo tercero: reparación de daños.

Capítulo cuarto: medidas de policía administrativa.

Capítulo quinto: medidas de policía administrativa directa.

Capítulo sexto: medidas provisionales.

Capítulo séptimo: medidas de ejecución forzosa

Disposición Adicional

Disposición Transitoria

Disposición Derogatoria

Disposiciones Finales

I. Exposición de Motivos.

La Ordenanza municipal de policía y buen gobierno de este Ayuntamiento fue publicada definitivamente el 4 de Febrero de 1993, con la finalidad de atender las necesidades, inquietudes y problemática existente en las vías y espacios públicos de este término municipal.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, con el ánimo de reforzar y facilitar la convivencia de sus vecinos y visitantes, pretende adecuar la presente norma a las peculiaridades de este municipio y también, de forma muy especial, acercar la norma al conocimiento público. Por ello, y para facilitar su difusión y conocimiento general, se realiza esta edición, deseando que con la observancia y el cumplimiento de esta Ordenanza por parte de todos, consigamos el bienestar social y la calidad de vida que espera y merece toda persona que se encuentre en este municipio.

Haciendo honor a la consecución de esta finalidad, se pretende armonizar de manera ecuánime el interés público y privado, con la finalidad de garantizar la convivencia de vecinos, visitantes y empresarios del término.

La convivencia en comunidad es la base del progreso humano y ésta, de por sí, implica la aceptación y cumplimiento de algunas normas sociales que hacen posible el ejercicio de los derechos individuales de las personas a la vez que los hace compatibles con el ejercicio de los derechos de los demás. Con la finalidad de velar por el libre ejercicio de estos derechos, se hace necesaria, la actuación contra actitudes antisociales que por minorías pueden ser ejercidos de muy diversas formas, más o menos graves, en las mismas vías urbanas, sobre su mobiliario, parques, edificios públicos y privados, y muy especialmente en zonas de espectáculos y esparcimiento, así como sobre otros bienes y derechos que suponen un detrimento de la calidad de vida y de la imagen del municipio y de sus vecinos.

Ante ello, la presente Ordenanza de Policía y Buen Gobierno se plantea como una herramienta destinada a clarificar o renovar algunas normas de con-

vivencia, potenciando el ámbito esencial de las relaciones humanas, no entendiéndose como un afán regulador de la vida de las personas, sino como un instrumento para la resolución de conflictos y la mejora de la tranquilidad, seguridad e imagen del municipio ante la ciudadanía y el mundo.

Título I: Disposiciones Generales

Capítulo primero: objeto y ámbito de la Ordenanza.

Artículo 1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la actuación de la Administración municipal en relación con las actividades privadas que afecten a los ámbitos personales y de los bienes y que tengan trascendencia en el aspecto público y de convivencia ciudadana, determinando los derechos de las autoridades locales en relación con la competencia municipal y con los intereses generales de la vecindad.

Artículo 2. El ámbito territorial de la Ordenanza se circunscribe al término municipal de Sant Josep de sa Talaia.

Capítulo segundo: derechos y deberes de los habitantes.

Artículo 3. Los habitantes del término ejercen los derechos reconocidos por la legislación vigente y en la presente ordenanza. El municipio, en el ámbito de sus competencias velará especialmente por los derechos de sus ciudadanos en las materias de competencia municipal, así como cualesquiera otras de legítimo ejercicio por parte de las entidades locales que se consideren de interés general.

Artículo 4. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia facilitará la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local, articulando, a través de las actuaciones administrativas que procedan, los medios necesarios para que los ciudadanos y sus organizaciones estén suficientemente informadas de la actividad municipal y puedan participar en la elaboración de proyectos de interés general. Las peticiones de información deberán ser suficientemente razonadas, salvo que se refieran a obtención de certificaciones de acuerdos o resoluciones.

Artículo 5. A través de las normas que considere convenientes, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia promoverá el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitará la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a ayudas económicas para la realización de sus actividades, e impulsará su participación en la gestión de la corporación, sin menoscabar las competencias y facultades de decisión de los sus órganos propios de gobierno.

Artículo 6. Todos los habitantes del municipio venderán obligados por las normas y disposiciones contenidas en la presente ordenanza. Igualmente afectarán, en lo que resulte de aplicación, a toda persona que se encuentre en el municipio.

Artículo 7. Todo español o extranjero que viva habitualmente en el territorio municipal deberá figurar empadronado. Cuando la residencia se tenga en más de un municipio, la inscripción en el padrón se realizará en el que habite más tiempo al año.

Artículo 8. Aparte de los deberes que se señalan en la legislación vigente, todos los habitantes del municipio y personas que se encuentren en él están obligados:

a) A prestar obediencia y acatamiento, respeto y consideración a la autoridad municipal, a sus delegados, agentes y policías locales en el ejercicio de sus funciones.

b) A cumplir las disposiciones que les afecten contenidas en esta ordenanza, bandos de la Alcaldía y el resto de ordenanzas o reglamentos municipales.

c) A colaborar con las autoridades sanitarias en las medidas que se adopten para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas y evitar perjuicios a la salud pública.

d) A presentar el oportuno auxilio a sus conciudadanos y a los agentes de la autoridad cuando se lo pidan o cuando fuera evidente que lo necesitaran, en casos extremos o de calamidad pública.

Artículo 9. Los propietarios de inmuebles afectados por la colocación de los rótulos que contengan los nombres de las calles, plazas y demás vías públicas, placas de numeración de edificios, indicadores de normas de circulación o de referencia a un servicio público, están obligados a permitir y soportar su fijación en estos, así como respetar su permanencia y visibilidad.

También están obligados a permitir la instalación, en sus paredes y fachadas, o en sus cercados y vallados, los elementos precisos y necesarios y sean necesarios para el tendido de las líneas de suministro o de los diferentes servicios públicos de competencia municipal establecidos o que se establezcan.

Capítulo tercero: normas generales de convivencia ciudadana.

Artículo 10. La actuación personal dentro de los ámbitos público y privado, por respeto a la normal convivencia ciudadana, debe tener como límite el punto a partir del cual se puedan producir perturbaciones o molestias a terceros.

Artículo 11. Son de especial aplicación las normas de esta ordenanza a toda manifestación de conducta contraria a la normal convivencia ciudadana que se produzca en el término municipal, con imputación de las responsabilidades directas y subsidiarias establecidas en las normas de derecho común.

Cuando el desprecio a las normas de convivencia y respeto debido a las personas sobrepase los límites y ámbito de esta ordenanza, se pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.

Artículo 12. Será sancionable toda conducta o hecho individual que vaya en contra de la compostura, orden y urbanidad exigible para la convivencia social, no se permitirán gritos, peleas o riñas y, en general, cualquier conducta que dé o pueda dar lugar a molestias a los ciudadanos.

Capítulo cuarto: seguridad en los espacios públicos.

Artículo 13. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia participará en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley reguladora de las bases de régimen local y en el marco de la Ley Orgánica 2 / 1986, de 13 de marzo, y normativa que las desarrolle o sustituya.

Artículo 14. Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el Reglamento propio del cuerpo, la Policía Local del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, en cuanto a su relación con los ciudadanos, cuidará especialmente:

- a) De la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, e instruir los atestados por accidentes de circulación que ocurran dentro del casco urbano.
- b) De la policía administrativa relativa a cumplimiento de ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales.
- c) De prestar los auxilios necesarios en casos de accidente, catástrofe o calamidad pública.
- d) Realizar todas las actuaciones que tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
- e) De cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridos para ello.
- f) De impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que comporte violencia física o moral.
- g) De auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que las circunstancias lo aconsejen o fuesen requeridos para ello, observando en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con éstos.
- h) Aquellas otras que se le atribuyan o puedan atribuir por la legislación vigente en cada momento.

Artículo 15. A efectos de garantizar la debida seguridad en los lugares públicos, además de las normas del Reglamento de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, los locales de espectáculos, teatros, cines, campos de deporte, establecimientos de hostelería y restauración y similares, deberán cumplir lo preceptuado en la legislación especial que los regula, tanto en el momento de la instalación o inauguración como en su posterior funcionamiento.

Artículo 16. Los propietarios o titulares de los establecimientos públicos, especialmente bares, cafeterías y similares, serán responsables del buen orden en su establecimiento.

A tal efecto, quedan obligados a:

- No facilitar bebidas alcohólicas a aquellas personas que, notoriamente, se encuentren en estado de embriaguez.
- No facilitar bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
- No suministrar comidas o bebidas de cualquier clase fuera del ámbito del establecimiento, se entiende por ámbito del establecimiento el interior del local y, en su caso, su terraza, nunca la acera, vía pública o espacios públicos; todo ello salvo la existencia de licencia municipal para utilización privativa de zonas de dominio público.
- Evitar que los clientes salgan a la vía pública llevando vasos o botellas de vidrio.

Artículo 17. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia podrá obligar a aquellos establecimientos en los que de forma habitual y reiterada se produzcan alteraciones del orden, a establecer un servicio especial de vigilancia y orden, dedicado única y exclusivamente a esta finalidad, sin perjuicio de que puedan solicitar la colaboración de la Policía Local para evitar los casos de gamberrismo y demás alteraciones del orden que puedan darse en sus establecimientos.

Capítulo quinto: organización y autorización de los actos públicos.

Artículo 18. Organización y autorización de los actos públicos.

1. Los organizadores de actos celebrados en espacios públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. A estos efectos deben cum-

plir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada caso por el órgano competente. Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores que depositen una fianza o suscriban una póliza de seguro para responder de los daños y perjuicios que se puedan causar.

2. Los organizadores de actos públicos deben velar para que los espacios públicos utilizados no se ensucien y no se deterioren sus elementos urbanos o arquitectónicos. En caso de deterioro, los organizadores quedan obligados a la correspondiente reparación, reposición y / o limpieza.

3. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización para la celebración de eventos festivos, musicales, culturales, deportivos o de índole similar en los espacios públicos donde se pretendan realizar cuando, por las previsiones del público asistente, las características del propio espacio público u otras circunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la convivencia o el civismo. En estos supuestos, siempre que sea posible, el Ayuntamiento propondrá a los organizadores espacios alternativos donde pueda celebrarse en el acto.

4. Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, y de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9 / 1983, de 15 de julio, el Ayuntamiento emitirá informe preceptivo motivado en el que se recogerán las circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan desaconsejar la celebración del acto o evento en el espacio público previsto por sus organizadores, a fin de que la autoridad gubernativa competente adopte la decisión que corresponda.

Título II: Normas de conducta en el espacio público, infracciones, sanciones e intervenciones específicas.

Capítulo primero: atentados contra la dignidad de las personas.

Artículo 19. Fundamentos de la regulación.

Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su fundamento, constitucional y legal, en la necesidad de evitar en el espacio público todas las prácticas individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables.

Artículo 20. Normas de conducta.

1. Queda prohibida en el espacio público toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones o conductas análogas.

2. Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriormente descritas cuando tengan como objeto o se dirijan contra personas mayores, niños y personas con discapacidades.

3. En concreto, se prohíben las actitudes de acoso entre menores en el espacio público. Estarán especialmente perseguidas las conductas de agresión o acoso a menores realizadas por grupos de menores que actúen en el espacio urbano.

4. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva o de cualquier otra índole, velarán porque no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas en los apartados anteriores, los organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.

Artículo 21. Régimen de sanciones.

1. Salvo que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente tendrá la consideración de infracción leve y será sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción o le corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la legislación aplicable.

2. Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones graves, que se sancionarán con multa de 750,01 a 1.500 euros, las conductas descritas en los apartados 2 y 3 del artículo precedente. Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros de estos grupos que se encontraran en el lugar de los hechos y participaran, activa o pasivamente, en la realización de las conductas

antijurídicas previstas en el artículo anterior.

Capítulo segundo: degradación visual del entorno urbano.

Artículo 22. Fundamentos de la regulación.

1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar del paisaje urbano de la ciudad, que es indisoluble del correlativo deber de mantenerlo en condiciones de limpieza, pulcritud y ornato.

2. Sin perjuicio de otras infracciones ya previstas en otras ordenanzas, el graffiti, las pintadas y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no sólo devalúan el patrimonio público o privado, mostrando su deterioro, sino que principalmente provocan una degradación visual del entorno, afectando la calidad de vida de los vecinos o vecinas y visitantes.

3. El deber de abstenerse de ensuciar, manchar y deslucir el entorno encuentra su fundamento en la evitación de la contaminación visual, y es independiente y por tanto compatible con las infracciones, incluidas las penales, basadas en la protección del patrimonio, tanto público como privado.

Artículo 23. Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas.

1. Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, así como interior o en el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general. Quedan excluidos los murales artísticos que se realicen con autorización del propietario o con autorización municipal.

2. Cuando el grafito o pintada se realice en un bien privado que se encuentre instalado de manera visible o permanente en la vía pública, será necesaria también la autorización expresa del Ayuntamiento.

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva o de cualquier otra índole, velarán porque no se produzcan, durante su celebración, conductas de degradación visual del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera de estos actos se producen las conductas descritas en el apartado primero de este artículo, los organizadores de los actos deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquellos serán también responsables directos y solidarios de las infracciones descritas en este artículo cometidas por los menores que se encuentren bajo su tutela, siempre que conste dolo, culpa o negligencia, incluyendo la simple inobservancia.

Artículo 24. Régimen de sanciones.

1. La realización de las conductas descritas en el artículo precedente tendrá la consideración de infracción leve y será sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.

2. Tendrán la consideración de infracción grave, sancionable con multa de 750,01 a 1.500 euros, las pintadas o los grafitos, cuando se atente especialmente el espacio urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados.

Artículo 25. Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad destruirán los materiales o medios empleados.

2. Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado fuera posible la limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad conminarán personalmente la persona infractora para que proceda a su limpieza, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la infracción cometida.

3. El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de los gastos que comporte la limpieza o reparación, sin perjuicio también de la imposición de las sanciones adecuadas.

4. Si las personas infractoras son menores, se harán los trámites adecuados y necesarios para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 23.

5. Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial prevista en el artículo 626 del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.

Capítulo tercero: apuestas.

Artículo 26. Fundamentos de la regulación.

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la salvaguarda de la seguridad pública, en la libertad de circulación de las personas y la protección de los legítimos derechos de los usuarios o usuarias del espacio público, sobre todo de los colectivos especialmente protegidos, como ahora los menores.

Artículo 27. Normas de conducta.

Está prohibido en el espacio público el ofrecimiento de apuestas que comporten apuestas con dinero o bienes, salvo autorización específica.

Artículo 28. Régimen de sanciones.

1. Tendrá la consideración de infracción grave y se sancionará con multa de 750,01 a 1.500 euros, el ofrecimiento de apuestas que impliquen apuestas de dinero o bienes, y en cualquier caso, el llamado juego de trile.

Artículo 29. Intervenciones específicas.

Si la infracción consiste en el ofrecimiento de apuestas en el espacio público, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, así como de los que sean fruto de la conducta infractora.

Capítulo cuarto: utilización del espacio público urbano para la oferta y demanda de servicios sexuales.

Artículo 30. Fundamentos de la regulación.

1. El Tribunal de Justicia de Estrasburgo en fecha 20 de noviembre de 2001 define la prostitución, no como un delito, sino como una actividad económica siempre que ésta se realice de forma independiente y autónoma, y como tal actividad económica queda supeditada a la obtención de licencia municipal.

2. Las conductas tipificadas como infracción en esta sección persiguen preservar los residentes de Sant Josep de sa Talaia de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o sol licitud de servicios sexual en la calle mantener la convivencia y evitar problemas de vialidad en lugares de tránsito público, y prevenir la explotación de determinados colectivos.

3. La presente normativa tiene como objetivo establecer una regulación sobre la ocupación del espacio público, y se dicta teniendo en cuenta los títulos competenciales municipales y los bienes jurídicos protegidos contemplados en el punto 2.

Artículo 31. Normas de conducta.

1. De acuerdo con las finalidades recogidas en el artículo anterior, se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público.

2. Está especialmente prohibido por esta Ordenanza el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de servicios sexuales en el espacio público, cuando estas conductas se lleven a cabo en lugares situados a menos de doscientos metros de recintos deportivos, parques infantiles, centros docentes o educativos en los que se imparten enseñanzas del régimen general del sistema educativo, en cualquiera de sus niveles y ciclos, o parques donde se junten niños o grupos de jóvenes.

3. Igualmente, está absolutamente prohibido mantener relaciones sexuales mediante o sin retribución en el espacio público.

Artículo 32. Régimen de sanciones.

1. Los agentes de la autoridad o los servicios municipales, en los casos previstos en los artículos anteriores, podrán denunciar a estas personas siempre que desarrollen algunas de las prácticas prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, podrá ser denunciado por desobediencia a la autoridad. También podrá ser denunciada la persona por desobediencia a los agentes de la autoridad, cuando conociendo las prohibiciones recogidas en el artículo anterior, no las respete aunque las realice en fechas o lugares diferentes en los cuales fueron informados y / o denunciados.

2. Las conductas recogidas en el apartado 1 y 3 del artículo anterior tendrán la consideración de leves, y serán sancionables con multa de hasta 750 euros.

3. Las conductas recogidas en el apartado 2 del artículo anterior tendrán la consideración de muy graves, y serán sancionables con multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

Artículo 33. Intervenciones específicas.

1. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, a través de los servicios sociales competentes, prestará información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan la prostitución en espacios públicos y quieran abandonar el ejercicio de estas prácticas.

2. Los servicios municipales competentes, con el auxilio de los agentes de la autoridad, en su caso, informarán a todas las personas que ofrecen servicios sexuales retribuidos en espacios públicos sobre las dependencias municipales y los centros de atención institucional o de carácter privado (asociaciones, ONG, etc.), a los que podrán acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar estas prácticas.

3. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia colaborará intensamente en la persecución y represión de las conductas que atenten contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, que se puedan cometer en el espacio público. En especial, las actividades de proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual, y, muy especialmente, en cuanto a los menores y personas con discapacidad.

Capítulo quinto: necesidades fisiológicas.

Artículo 34. Fundamentos de la regulación.

Es fundamento de la regulación contenida en este capítulo la protección de la salud pública y la salubridad, el derecho de disfrutar de un espacio público limpio y no degradado, y el respeto a las pautas generalmente aceptadas de la convivencia ciudadana y de civismo.

Artículo 35. Normas de conducta.

1. Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como defecar, orinar y otras análogas, en cualquiera de los espacios públicos de este municipio, salvo en las instalaciones o elementos que estén destinados especialmente a la realización de aquellas necesidades.

2. Queda especialmente prohibida la conducta descrita en el apartado

anterior, cuando se realiza en espacios de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores, o monumentos o edificios de catalogación especial, o edificios institucionales o administrativos.

Artículo 36. Régimen de sanciones.

1. La conducta descrita en el apartado 1 del artículo precedente será constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.

2. Constituirá infracción grave, sancionada con multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta descrita en el apartado 2 del artículo precedente.

Capítulo sexto: consumo de bebidas alcohólicas.

Artículo 37. Fundamentos de la regulación.

La regulación que se contiene en este capítulo se fundamenta en la protección de la salud pública y la salubridad, el respeto al medio ambiente, la protección de los menores, el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos o vecinas, el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía pública, la garantía de la seguridad pública, además de otros bienes como la competencia leal en el marco de una economía de mercado y los derechos de los consumidores o consumidoras y usuarios o usuarias.

Artículo 38. Normas de conducta.

1. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos, salvo las autorizaciones que se puedan otorgar en casos puntuales.

2. Queda especialmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas descrita en el apartado 1 de este artículo cuando pueda alterar gravemente la convivencia ciudadana. A estos efectos, dicha alteración se produce cuando, según apreciación de la autoridad municipal o de sus agentes, concurra alguno de los supuestos siguientes:

a) Cuando por la morfología o la naturaleza del lugar público, el consumo se pueda hacer de forma masiva por grupos de ciudadanos o ciudadanas o invite a la aglomeración de estos.

b) Cuando, como resultado de la acción del consumo, se pueda deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar situaciones de insalubridad.

c) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los peatones o el resto de usuarios de los espacios públicos.

d) Cuando los lugares se caractericen por la afluencia de menores o la presencia de niños y adolescentes.

3. Salvo que exista autorización municipal específica para la expedición de bebidas, los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán porque no se produzcan durante su celebración las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas en los dos apartados anteriores, los organizadores de los actos lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres, tutores o tutoras, guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquellos serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por menores de edad, siempre que conste culpa o negligencia por su parte.

5. Todo recipiente de bebida debe ser depositado en los contenedores correspondientes y, en su caso, en las papeleras situadas en el espacio público. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos, o cualquier otro objeto.

Artículo 39. Régimen de sanciones.

1. La realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente será constitutiva de una infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 750 euros, salvo que los hechos sean constitutivos de una infracción más grave.

2. La realización de la conducta descrita en el apartado 5 del artículo precedente será constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.

3. Constituye infracción grave, que se sancionará con multa de 750,01 a 1.500 euros, la conducta prohibida de consumo de bebidas alcohólicas descrita en el apartado 2 del artículo precedente.

Artículo 40. Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad destruirán las bebidas, los envases o los demás elementos objeto de las prohibiciones, así como los materiales o los medios empleados. Las bebidas alcohólicas y los alimentos intervenidos podrán ser destruidos inmediatamente por razones higiénico-sanitarias.

2. Si las personas infractoras son menores, se practicarán las diligencias necesarias para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 38, para proceder, también, a su denuncia.

3. Para garantizar la salud de las personas afectadas por consumo de alcohol, así como para evitar molestias graves a los ciudadanos y ciudadanas, los agentes de la autoridad, cuando proceda, podrá solicitar la participación de los servicios sanitarios correspondientes.

Capítulo séptimo: comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos.

Artículo 41. Fundamentos de la regulación.

Las conductas tipificadas como infracción en el presente capítulo se fundamentan en la protección de la salubridad, el uso racional y ordenado de la vía pública, y la salvaguarda de la seguridad pública, además, en su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal en la economía de mercado y los derechos de consumidores y usuarios.

Artículo 42. Normas de conducta.

1. Está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos, salvo las autorizaciones específicas.

2. Queda prohibido colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes no autorizados, con acciones como facilitar, guardar, vigilar el género o alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.

3. Los organizadores de cualquier acto público, reunión, actividad cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán para que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas en los apartados anteriores, los organizadores de los actos lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.

Artículo 43. Régimen de sanciones.

1. Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas descritas en los apartados del artículo precedente son constitutivas de infracción leve, que serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.

Artículo 44. Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, cuando se trate de artículos perecederos, los agentes de la autoridad retirarán y destruirán el género.

El resto de bienes intervenidos quedarán depositados en las dependencias municipales a disposición de su propietario, que podrá retirarlos con el pago previo de la correspondiente sanción y suficiente justificación de la propiedad; si transcurridos diez días desde la intervención de éstos, no hubieran sido retirados por sus legítimos propietarios, serán destruidos o entregados a asociaciones sin ánimo de lucro.

2. Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de ilícito penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 107 de esta Ordenanza.

3. La utilización de medios de transporte, para el almacenamiento y / o traslado de los productos objeto de comercio, podrán suponer la retirada e intervención cautelar del vehículo en los términos establecidos en la presente Ordenanza.

Capítulo octavo: Actividades y prestación de servicios no autorizados, demanda y consumo de estos.

Artículo 45. Fundamentos de la regulación.

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el uso racional, ordenado y propio de las vías y los espacios públicos, el derecho de las personas a no ser molestadas o perturbadas en el ejercicio de su libertad, la salud de las personas, la salvaguarda de la seguridad pública, además, en su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal y los derechos de consumidores y consumidoras y usuarios.

Artículo 46. Normas de conducta.

1. Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados en el espacio público, como el tarot, videncia, masajes, tatuajes y otras actividades análogas.

2. Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los servicios no autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole, velarán para que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.

4. La realización de estas actividades en los espacios públicos requerirá de autorización previa municipal.

Artículo 47. Régimen de sanciones.

1. Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en los apartados del artículo precedente serán constitutivas de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 750 euros.

Artículo 48. Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente el género o elementos objeto de las prohibiciones, y los materiales o los medios empleados.

Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino que sea adecuado.

2. Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de la infracción penal de estafa, tipificada en los artículos 248 a 251 y 623.4 del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 107 de esta Ordenanza.

Capítulo noveno: uso impropio del espacio público.

Artículo 49. Fundamentos de la regulación.

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía de un uso racional y ordenado del espacio público y sus elementos, además, en su caso, de la salvaguarda de la salubridad, la protección de la seguridad y el patrimonio municipal.

Artículo 50. Normas de conducta.

1. Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de manera que impida o dificulte su utilización para el resto de usuarios.

2. No se permiten los siguientes usos impropios de los espacios públicos y de sus elementos:

a) acampar en las vías y espacios públicos o privados de uso público en tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos. No está permitido tampoco dormir de día o de noche en estos espacios. Cuando se trate de personas en situación de exclusión social, se estará a lo que se prevé el artículo 52.2 de esta Ordenanza.

b) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos diferentes a los que están destinados, igualmente se incluirá la ocupación de mobiliario o partes de la vía en que se afecte o pueda afectar a la seguridad y convivencia ciudadana.

c) Lavarse o bañarse en las fuentes, los lagos o similares

d) Lavar ropa en las fuentes, los estanques, las duchas o similares.

e) Utilizar las señales de tráfico, farolas o similares para aparcar bicicletas o motos.

f) Los camiones dedicados a la limpieza de fosas sépticas, siempre que trabajen en zonas turísticas o comerciales, deberán realizar su actividad en horario nocturno (de las 24 h hasta las 7 h) para perjudicar y molestar lo menos posible los comercios y sus clientes. En las zonas residenciales, en cambio, esta actividad se realizará en horario diurno (de 8 a 20 horas).

Artículo 51. Régimen de sanciones.

La realización de las conductas descritas en el artículo precedente es constitutiva de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 750 euros.

Artículo 52. Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente el género, los materiales y los medios empleados.

2. Los servicios municipales adoptarán, en cada caso, las medidas que sean procedentes en coordinación con los servicios sociales municipales o, en su caso, con otras instituciones públicas y, si lo estimara necesario por razones de salud, acompañará estas personas al establecimiento o servicio municipal adecuado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo que sea posible. En este caso no se impondrá la sanción prevista.

3. En los supuestos previstos en el artículo 50.2.a) en relación con caravanas y autocaravanas, los servicios municipales y los agentes de la autoridad informarán, si la hay, sobre los lugares municipales habilitados para el estacionamiento de estos vehículos.

4. Cuando se trate de la acampada con autocaravanas, caravanas o cualquier otro tipo de vehículo, descrita en el apartado a) del artículo 50.2 de la presente Ordenanza, y la persona infractora no acredite la residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, si no se deposita su importe, se procederá a la inmovilización del vehículo y, en su caso, a su retirada e ingreso en el depósito municipal.

Capítulo décimo: actividades vandálicas en el uso del mobiliario urbano.

Artículo 53. Fundamentos de la regulación.

Con las conductas tipificadas como infracción en este capítulo se protege el uso racional del espacio público, el respeto a las personas y bienes, la seguridad, la salud e integridad física de las personas o el patrimonio municipal.

Artículo 54. Normas de conducta.

1. Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas o los bienes.

2. Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios públicos o sus instalaciones o elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de las alteraciones de la seguridad ciudadana previstas en el apartado

1 anterior.

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole, velarán para que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan en el espacio público las conductas descritas en los dos apartados anteriores, los organizadores de los actos deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores de los que dependan los menores, serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por menores de edad, siempre que conste culpa o negligencia por parte de aquellos.

Artículo 55. Régimen de sanciones.

1. Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad ciudadana, las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente son constitutivas de infracción muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

2. Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad ciudadana, los actos de deterioro descritos en el apartado 2 del artículo precedente son constitutivos de infracción grave, y se sancionarán con multa de 750,01 a 1.500 euros.

Artículo 56. Intervenciones específicas.

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, en su caso, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales, el género, o los medios empleados.

2. Si la persona infractora es un menor, se practicarán las diligencias necesarias para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 54, para proceder, también, a su denuncia.

3. Cuando la presencia estática de grupos de personas, dada su actitud incívica, pueda alterar la seguridad, la convivencia y se vean afectados bienes públicos o privados, podrá procederse a la privación del derecho a la permanencia en el lugar objeto de conflicto.

La privación del derecho a la permanencia en las zonas privadas, descritas en el párrafo anterior, únicamente podrá ejecutarse se previa denuncia del titular de bien afectado.

Capítulo undécimo: venta de vehículos de segunda mano en la vía pública.

Artículo 57. Fundamentos de la regulación.

La venta de automóviles de segunda mano, mediante su exhibición en la vía pública, carece de regulación en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que lo que debería ser un contrato de compraventa entre particulares se convierte en un negocio, lo que da lugar a la pérdida de su condición privada para convertirse en una actividad sometida a controles de poderes públicos debiendo exigirse las garantías que el Derecho Mercantil impone a sus comerciantes, para garantizar los derechos de los consumidores, así como la identidad de los vendedores a los efectos de los diversos controles administrativos impuestos por la legislación vigente.

Artículo 58. Normas de conducta.

Se prohíbe la venta de vehículos con el cartel 'se vende' que permanezcan estacionados en la vía pública.

Artículo 59. Régimen de sanciones.

El incumplimiento de este artículo se considera una infracción leve, que será sancionado con multa de hasta 750 euros.

Artículo 60. Intervenciones específicas.

Los vehículos que incumplen la ordenanza serán retirados por el servicio de grúa municipal, por lo que sus propietarios se harán cargo del pago de las tasas correspondientes.

Capítulo duodécimo: otras conductas que dificulten la convivencia ciudadana.

Sección 1: zonas naturales, espacios verdes y playas

Artículo 61. Fundamentos de la regulación.

Es fundamento de la presente normativa proteger el correcto uso de los parques y jardines, los parques forestales, las plantaciones y los espacios verdes privados, así como garantizar la seguridad de las personas y el mantenimiento de las playas, exceptuando las zonas especialmente protegidas por otras normativas.

Igualmente se establece la responsabilidad del titular de inmuebles de impedir la ocupación excesiva por parte de la vegetación que pueda existir en su propiedad, de producir molestias o alterar la seguridad de los usuarios de la vía pública, ya sea dificultando la circulación a los peatones, la circulación o la visibilidad del trazado o de la señalización viaria.

El acceso y la circulación de las motocicletas y los automóviles en los parques, jardines y playas está prohibido salvo los vehículos autorizados y los vehículos de los servicios municipales.

Artículo 62. Normas de conducta.

1. La seguridad en las playas y especialmente en las actividades en la mar, exigen la observación de las indicaciones que se den y el respeto de las señalizaciones sobre las condiciones y los lugares de baño.
2. La bandera verde indica la ausencia de peligro, lo que permite una actividad normal en la playa. Con bandera amarilla deberán extremar las precauciones en el agua. La bandera roja significa la prohibición del baño.
3. Está prohibido el baño en los espigones y en otras zonas señalizadas en las que no se permite el baño o el paso está restringido.
4. También se prohíbe utilizar jabón u otros elementos de higiene en las duchas públicas de las playas.

Artículo 63. Régimen de sanciones.

El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores constituirá una infracción leve y será sancionada con multa de hasta 750 euros.

Sección 2: contaminación acústica y otras actividades.

Artículo 64. Fundamentos de la regulación.

Esta regulación tiene por objeto proteger los derechos fundamentales a la vida e integridad física y a la intimidad e inviolabilidad del hogar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 18 de la Constitución, así como los derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud previstos en los artículos 43 y 45 del mismo texto constitucional.

Subsección 1.- Actuaciones musicales en la calle.

Artículo 65. Requisitos de las licencias.

a) Las actuaciones musicales en la calle requieren licencia y para obtenerla deberán presentar en el Ayuntamiento junto con la solicitud una memoria explicativa en la que harán constar:

- Descripción de la actividad a realizar.
- Emplazamiento solicitado.
- Instrumentos a utilizar.
- Si cuenta o no con amplificaciones.
- Si cuenta con instrumentos de percusión.
- Horario de las actuaciones.

Presentada en el Registro del Ayuntamiento la solicitud, se entenderá concedida a precario y la Alcaldía podrá resolver su limitación o prohibición en atención al interés público.

b) Las actuaciones se harán en espacios públicos de anchura superior a 7 metros, y siempre que no produzcan dificultades en el tránsito o impidan el uso normal de la vía pública.

c) Las actuaciones se harán en el horario comprendido entre las 18.00 y las 23.00 horas y no deberán tener una duración superior a los 30 minutos. Además, con independencia de quien las realice, nunca podrán superar el tiempo total de 2 horas en un día en una misma ubicación.

d) Las actuaciones no tendrán que colindar con centros docentes, hospitales, clínicas o residencias asistidas ni terrazas o veladores.

Subsección 2.- Mimos, estatuas humanas y figuras de arena.

a) Este tipo de actuaciones requieren licencia municipal sin perjuicio de cualquier otra exigida por los otros organismos.

Para la obtención de la antes mencionada licencia deberá presentar una memoria explicativa en la que harán constar.

- Descripción de la actividad.
- Emplazamiento solicitado.
- Horario de las actuaciones o permanencia en el lugar.

Presentada en el Registro del Ayuntamiento la solicitud, se entenderá concedida a precario y la Alcaldía podrá resolver su limitación o prohibición en atención al interés público.

b) Las actuaciones se harán en espacios públicos de anchura superior a 7 metros y siempre que no produzcan dificultades en el tránsito o pongan impedimento al uso normal de la vía pública.

c) Las actuaciones se harán en el horario comprendido entre las 18 y las 24 horas, excepto las estatuas de arena que no tendrán, en principio, limitación horaria.

d) Las actuaciones en ningún caso podrán producir molestias a los vecinos o usuarios de las vías públicas donde se realicen.

Artículo 66. Régimen de sanciones.

Cualquier incumplimiento de los apartados anteriores será sancionado con multa de hasta 750 euros y podrá conllevar la retirada de la licencia.

Título III: Tenencia de animales

Capítulo primero: perros.

Artículo 67. Los propietarios de perros están obligados a declararlos en las oficinas municipales para formalizar su oportuna matrícula, en la que también serán inscritos de oficio los perros no declarados, de los que se conozca su existencia.

Artículo 68. Quienes cediesen alguno de estos animales a otra persona dentro del término municipal, deberán dar cuenta a las oficinas municipales del nombre del nuevo poseedor y de su domicilio.

Artículo 69. La circulación de perros por la vía pública deberá realizarse conduciéndolos sus propietarios con cadena o cordón resistente, y en los supuestos de animales catalogados como potencialmente peligrosos o de carácter activo, bozal que les impida morder. También con referencia a los peligrosos, el animal deberá ir acompañado por una persona capaz de dirigirlo.

De los daños causados por los perros serán responsables sus propietarios.

Artículo 70. Los animales que se encuentren sueltos en las vías públicas serán recogidos por los servicios municipales y depositados en los locales habilitados al efecto, a disposición de sus propietarios, los cuales podrán retirarlos una vez hayan justificado su pertenencia, abonando los gastos de manutención, la tasa establecida, en su caso, y la multa correspondiente.

Transcurrido el plazo de diez días sin ser reclamados por sus legítimos propietarios, según la clase de animal de que se trate, posibilidad de mantenimiento, disponibilidad de medios, valor del animal u otra circunstancia que la autoridad municipal estime oportuno considerar, determinará la entrega a entidades, instituciones protectoras de animales o personas interesadas. Todo ello sin perjuicio de las medidas especiales que por razones sanitarias sean necesarias.

Artículo 71.

1. Todos los perros deberán estar debidamente vacunados contra la rabia.
2. Los perros sospechosos de rabia y los que al morir permitan suponer esta enfermedad, deberán ser conducidos para que los examine al veterinario titular.

3. Siempre que sea posible, y especialmente en caso de agresión, se deberá respetar la vida de los animales para facilitar el diagnóstico y sólo se justificará su sacrificio cuando exista peligro inminente.

4. Quienes hayan sido mordidos por un perro, deberán comunicarlo inmediatamente a los servicios sanitarios para que se les pueda someter a tratamiento, si así lo aconsejase el resultado de la observación animal.

5. Las personas que ocultasen a la Inspección Municipal algún caso de rabia o dejasen al animal que la padezca en libertad de causar daños, serán puestos a disposición de los tribunales de justicia, a efectos del artículo 600 del Código Penal.

6. La tenencia de perros y otros animales domésticos, que por sus ladridos continuados u otras personas perturben el normal descanso de los ciudadanos, será corregida mediante la imposición de la sanción que corresponda.

Capítulo segundo: animales domésticos.

Artículo 72. Queda prohibido el abandono de excrementos que puedan producir los perros, gatos y otros animales en las vías y espacios libres públicos o privados de concurrencia pública. Los propietarios o portadores de los animales están obligados, bajo su exclusiva responsabilidad, a la inmediata recogida de los excrementos que pudieran producirse mediante la utilización de artilugios o envoltorios que permitan recogerlos y guardarlos de manera hermética, y a depositarlos de manera higiénicamente aceptable en los contenedores o recipientes de residuos sólidos urbanos. A estos envoltorios, los deberán llevar consigo los portadores de animales, y la Policía Local podrá comprobar en todo momento si se cumple con esta obligación, siendo motivo de sanción pasear a un animal sin contar con los mismos.

Artículo 73. La tolerancia de animales domésticos en general estará condicionada a la utilidad o nocividad de los mismos en relación con las personas, a las circunstancias higiénicas de su alojamiento y a la posible existencia de peligros e incomodidades para los vecinos en general.

Artículo 74. Previo informe de los servicios veterinarios, la autoridad municipal, teniendo en cuenta las condiciones mencionadas en el artículo anterior, en cada caso podrá decidir lo que proceda, según el informe que emitan los mencionados servicios veterinarios como consecuencia de las visitas domiciliarias, que les habrán de ser facilitadas.

Artículo 75. La tenencia de aves de corral, conejos y palomas se sujetará a las exigencias necesarias para prevenir posibles focos de infección y a las ordenanzas de edificación en cuanto a las zonas en que estén permitidas.

En todo caso deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Que se trate de animales destinados exclusivamente al consumo familiar o que, en caso de tratarse de la cría de palomas mensajeras, esté debidamente autorizado a estos efectos su propietario.

b) Que los locales destinados a su tenencia reúnan las condiciones técnicas adecuadas, de acuerdo con el informe de los Servicios Veterinarios, y que se hallen separados e independientes de las viviendas y a una distancia no menor de cinco metros de las mismas, y se cumplan las exigencias sanitarias e higiénicas pertinentes.

En ningún caso se permitirá la tenencia de los animales mencionados en los apartados anteriores en patios interiores.

Artículo 76. Los animales no tolerables deberán ser desalojados por sus dueños, y si éstos no lo hicieran después de requeridos en forma, les serán decomisados.

Artículo 77. Los gatos y demás animales domésticos, así como las cabañerías y otros de gran talla que causaran lesiones a personas, habiendo sido mordidos los mismos por perros o fuesen sospechosos de padecer rabia, deberán someterse a observación y diagnóstico de los Servicios Veterinarios municipales para que se les aplique el tratamiento procedente.

Artículo 78. Se prohíbe hostigar y castigar a los animales, y en general darles trato violento con el que se les ocasionen sufrimientos crueles o innecesarios. Cuantas personas presencien hechos contrarios a esta disposición tendrán el deber de denunciar a los infractores, para que se les imponga el correspondiente correctivo.

Artículo 79. Régimen de sanciones.

Cualquier incumplimiento de los apartados anteriores será sancionado con multa de hasta 750 euros.

Título IV: Ruidos y olores

Artículo 80. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia.

Artículo 81. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones industriales y vehículos de motor, de espectáculos públicos y de protección del medio ambiente o cualquier otra actividad generadora de ruidos, se prohíbe la emisión de cualquier ruido doméstico que por su volumen u horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública así como la emisión de olores molestos o perjudiciales para las personas.

Artículo 82. Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los aparatos reproductores de sonido cuando circulen o estén parados/estacionados.

Artículo 83. Queda prohibido llevar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios sin autorización previa de la Administración.

Artículo 84. Régimen sancionador.

1. Las acciones u omisiones que en relación a lo dispuesto en el presente título produzcan molestias o atenten contra la normal convivencia ciudadana, conllevarán la sanción de hasta 750 euros en el caso de infracciones leves, siendo estas las cometidas en horario diurno y de 750,01 a 1.500 euros en los supuestos de infracciones graves, siendo estas las cometidas en horario nocturno, con excepción de lo dispuesto en el artículo 80, consideradas siempre leves.

2. Se entenderá por horario diurno la franja horaria dispuesta entre las 08 y las 22 horas, y horario nocturno el existente entre las 22 y las 08 horas.

Artículo 85. Intervenciones específicas.

Cuando en la comisión de las infracciones descritas en el presente título intervengan aparatos reproductores de sonido, éstos podrán ser intervenidos por parte de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, quedando bajo su custodia en los términos establecidos en la presente Ordenanza. Así mismo podrán proceder a la incautación de otros elementos con iguales fines.

Título V: Disposiciones comunes sobre medidas de aplicación.

Capítulo primero: disposiciones generales.

Artículo 86. Decretos e instrucciones del alcalde o alcaldesa en el desarrollo y aplicación de la Ordenanza.

Mediante Decreto de Alcaldía se aprobará un manual operativo sobre las cuestiones que plantea la aplicación de esta Ordenanza, en el cual se desarrollarán y concretarán las actuaciones de los diversos órganos y agentes municipales implicados.

Artículo 87. Funciones de la Policía Local

La Policía Local es la encargada de velar por el cumplimiento de esta Ordenanza, de denunciar, cuando sea procedente, las conductas que sean contrarias a la misma, y de adoptar, en su caso, las otras medidas de aplicación.

Artículo 88. Deber de colaboración ciudadana en el cumplimiento de la Ordenanza.

1. Todas las personas que viven en Sant Josep de sa Talaia tienen el deber de colaborar con las autoridades municipales o con sus agentes para preservar las relaciones de convivencia ciudadana y civismo en el espacio público.

2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia pondrá los medios necesarios para facilitar que, en cumplimiento de su deber de colaboración, cualquier persona pueda poner en conocimiento de las autoridades municipales los hechos de los cuales hayan tenido conocimiento y que sean contrarios a la convivencia ciudadana o al civismo.

3. De acuerdo con lo que se contempla en la Ley orgánica 1/1996, de protección del menor, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de comunicar a las autoridades o agentes más próximos cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de un menor. Así mismo, todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan conocimiento que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de manera habitual, han de ponerlo en conocimiento de los agentes más próximos o de la autoridad competente, a los efectos que se adopten las medidas pertinentes.

Artículo 89. Conductas obstruccionistas en las tareas de control, investigación o sanción en los ámbitos de la convivencia y el civismo.

1. En los ámbitos de la convivencia ciudadana y el civismo, y salvaguardando todos los derechos previstos en el ordenamiento jurídico, no se permiten las conductas siguientes:

a) La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control del Ayuntamiento.

b) La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por los funcionarios actuantes en cumplimiento de sus funciones.

c) Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de sus tareas de inspección, control o sanción, información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de manera explícita o implícita.

d) El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos específicos formulados por las autoridades municipales o sus agentes.

2. Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, las conductas descritas en el apartado anterior son constitutivas de infracción muy grave, que será sancionada con multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

Artículo 90. Elementos probatorios de los agentes de la autoridad.

1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los hechos constatados por agentes de la autoridad tienen valor probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de otras pruebas que puedan aportar los interesados.

2. A los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los requisitos que correspondan de acuerdo con la legislación vigente, se podrán incorporar imágenes de los hechos denunciados, ya sea en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los hechos recogidos en la denuncia formulada de acuerdo con la normativa aplicable. En todo caso, la utilización de videocámaras requerirá, en su caso, las autorizaciones previstas en la legislación aplicable, así como su uso de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Artículo 91. Denuncias ciudadanas.

1. Sin perjuicio de la existencia de otros interesados a parte del presunto infractor, cualquier persona, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 88, puede presentar denuncias para poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de una infracción de lo establecido en esta Ordenanza.

2. Las denuncias tendrán que expresar la identidad de la persona o personas que las presenten, el relato de los hechos que pudiesen constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las personas presuntamente responsables.

3. Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento tendrá que comunicar al denunciado la iniciación o no de dicho procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga en el mismo.

4. Previa valoración del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el instructor podrá declarar confidenciales los datos personales del denunciante, garantizando el anonimato del mismo en el transcurso de la tramitación del expediente administrativo. Esta confidencialidad será declarada cuando lo solicite el denunciante.

5. Cuando una persona denuncie miembros relevantes de las redes organizadas en beneficio de las cuales realiza una actividad antijurídica, se considerará que la persona denunciante no ha cometido la infracción siempre que se acredite debidamente esta circunstancia denunciada. El mismo tratamiento tendrá la persona que denuncie las infracciones de esta Ordenanza cometidas por grupos de menores organizados. En estos casos, se les requerirá a no volver a realizar esta actividad antijurídica.

Artículo 92. Medidas específicas a aplicar en el caso que las personas infractoras sean no residentes en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia.

1. Las personas denunciadas tendrán que comunicar y acreditar al agente de la autoridad denunciante, a los efectos de notificación, su identificación personal y domicilio habitual, y, en su caso, el lugar y dirección de donde están alojados en el municipio, de no ser residentes. Los agentes de la autoridad podrán comprobar en todo momento si la dirección proporcionada por la persona infractora es la correcta.

En el caso que esta identificación no fuese posible o no fuese correcta la localización proporcionada, los agentes de la autoridad, a este fin, podrán requerir a la persona infractora que les acompañe a dependencias próximas, en los términos y circunstancias previstos en el apartado 4 del artículo 105 de esta Ordenanza.

2. Cuando la persona infractora no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente que formule la denuncia le ofrecerá la posibilidad de hacer inmediatamente efectiva la sanción, en los términos previstos en el apartado 1. Si la sanción no fuese satisfactoria, el órgano competente mediante acuerdo motivado, adoptará inmediatamente como medida cautelar el ingreso de una cantidad económica que represente un mínimo de la sanción económica prevista. Esta medida provisional será notificada con carácter urgente a la dirección donde aquella persona esté alojada en el pueblo o en la localidad correspondiente. En el supuesto que no se proceda al ingreso de esta cantidad, se le advertirá, en su caso, que podría incurrir en responsabilidad penal.

3. En el caso que las personas denunciadas no residentes en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia sean extranjeras y no satisfagan la sanción en los términos descritos, una vez haya finalizado el procedimiento mediante resolución, se comunicará a la embajada o consulado correspondiente y a la Dirección Insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, la infracción, la identidad de la persona infractora y la sanción que recaiga, a los efectos oportunos.

4. El Ayuntamiento propondrá a las autoridades competentes aquellas modificaciones de la normativa vigente que tiendan a facilitar y mejorar la efectividad de las sanciones que se impongan a los no residentes en el municipio.

5. De acuerdo con los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 8.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público procedente de las sanciones previstas en la presente Ordenanza, y que se hayan de efectuar fuera del término municipal de Sant Josep de sa Talaia, se regirán por los convenios que se puedan suscribir con el resto de administraciones públicas.

Artículo 93. Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores de edad.

1. De acuerdo con aquello que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, todas las medidas en este caso sancionadoras de las autoridades municipales que puedan afectar a los menores atenderán principalmente el interés superior de estos. Así mismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

2. Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos del niño o adolescente, su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como ahora la asistencia a sesiones formativas, trabajos para la comunidad, o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico. Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función del tipo de infracción, y serán proporcionales a la sanción que reciba la conducta infractora. A este efecto, se solicitará la opinión de padres, madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras.

3. Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán responsables civiles subsidiarios de los daños producidos por las infracciones cometidas por los menores de edad que dependan de ellos.

4. Así mismo, en aquellos casos en que se contemple expresamente en esta Ordenanza, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, en este caso, concurra culpa o negligencia por su parte.

5. La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la educación básica obligatoria (educación primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores desde la edad de seis años hasta la de dieciséis.

6. La Policía Local intervendrá en aquellos supuestos en los cuales los menores de edad transiten o permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A este efecto, la Policía Local solicitará su identificación, averiguará cuáles son las circunstancias y los motivos por los cuales no están en el centro de enseñanza, y los conducirá a su domicilio o al centro escolar donde esté inscrito, poniendo en todo caso en conocimiento de sus padre o madre o tutor o tutora o guardador o guardadora y de la autoridad educativa competente, que el menor ha sido encontrado fuera del centro educativo en horario escolar.

7. Sin perjuicio que, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se pueda acudir a fórmulas de mediación para resolver estas conductas, los padres y madres, o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras serán responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la no asistencia de estos a los centros educativos. En estos casos, cuando concurra culpa o negligencia, los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores o guardadoras incurrirán en una infracción leve y podrán ser sancionados con multa de hasta 750 euros, o en su caso, aceptar las medidas previstas en el apartado 9 de este artículo.

8. En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición de una sanción a un menor será también notificada a sus padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras.

9. Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras tendrán que asistir a las sesiones de atención individualizada o cursos de for-

mación que, en su caso, se impongan como alternativa a la sanción pecuniaria de las infracciones cometidas por los menores que dependan de ellos.

Artículo 94. Pago de la sanción in situ.

Las personas infractoras que asuman de entrada su culpabilidad podrán hacer efectiva inmediatamente la sanción establecida en la presente Ordenanza en su cuantía mínima y con un descuento del 30% sobre la misma.

Artículo 95. Principio de prevención.

El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público.

Artículo 96. Mediación.

1. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia promoverá especialmente la mediación y la resolución alternativa de los conflictos como herramienta básica para una sociedad menos litigiosa y más cohesionada.

2. En aquellos supuestos en los cuales las infracciones sean cometidas por menores, y con el objetivo de proteger los intereses superiores del niño o niña, los servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia establecerán un sistema de mediación, que actuará con carácter voluntario respecto al procedimiento administrativo sancionador, con personal especializado al cual serán llamados a comparecer los menores presuntamente infractores, sus padres y madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras, así como, en su caso, las posibles víctimas o personas afectadas por las conductas tipificadas como infracción en la presente Ordenanza.

3. El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia procederá a designar mediadores o mediadoras que, en calidad de terceras personas neutrales, resolverán los conflictos de convivencia ciudadana siempre que los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores o guardadoras del menor acepten que este se someta a una solución consensuada entre el menor, sus padres y madres o tutores y tutoras o guardadores o guardadoras, y la administración municipal, así como, en su caso, las víctimas de la infracción.

4. La mediación tendrá por objeto que el menor infractor sea consciente del daño causado a la comunidad y perseguirá, después de una negociación entre las partes, un acuerdo sobre las medidas de reparación que tendrán que adoptarse en cada caso.

5. Este sistema de mediación podrá ser aplicado también, con carácter voluntario, a otras conductas y colectivos específicos. El órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá, por acuerdo motivado y previa solicitud de la persona infractora o de los servicios sociales competentes, reconducir el procedimiento sancionador a un sistema de mediación, siempre que la dimensión retributiva de la conducta infractora sea más eficaz a través de esta vía.

Capítulo segundo: régimen sancionador.

Artículo 97. Graduación de las sanciones.

1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiarán por la aplicación del principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:

- a) La gravedad de la infracción.
- b) La existencia de intencionalidad.
- c) La naturaleza de los perjuicios causados.
- d) La reincidencia.
- e) La reiteración.
- f) La capacidad económica de la persona infractora.

2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de una infracción de esta Ordenanza y ha sido declarada por resolución firme. Hay reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones de esta Ordenanza o cuando se están instruyendo otros procedimientos sancionadores por infracciones de esta Ordenanza.

3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

4. Cuando, según lo que contempla la presente Ordenanza, se impongan sanciones no pecuniarias, sean alternativas u obligatorias, la determinación de su contenido y duración se hará, también, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios enunciados en los párrafos anteriores.

Artículo 98. Responsabilidad de las infracciones.

En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a individualizar la persona o personas infractoras, no sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 99. Concurrencia de sanciones.

1. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales exista relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.

2. Cuando no se de la relación de causa a efecto a la cual se refiere el apartado anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas salvo que

se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En este último supuesto se aplicará el régimen que sancione con mejor intensidad, gravedad o severidad la conducta de la cual se trate.

Artículo 100. Procedimiento sancionador.

1. Cuando se trate de infracciones leves cometidas por extranjeros no residentes que afecten la convivencia ciudadana en los términos de esta Ordenanza, y siempre que no exista un procedimiento específico en la legislación sectorial aplicable, el agente de la autoridad que formule la denuncia actuará como instructor del expediente y entregará a la persona denunciada, en el mismo momento de los hechos, una denuncia en la cual constarán los hechos y los cargos que se le imputen para que, en el plazo de dos días, formule, en su caso, alegaciones y plantee los medios de prueba pertinentes para su defensa. Una vez transcurrido el plazo de dos días o practicada la prueba correspondiente, el órgano competente dictará resolución en un plazo máximo de un día y se comunicará a la persona infractora la sanción correspondiente.

2. En el procedimiento sancionador será de aplicación el Decreto 14/1994, de 10 de Febrero, en el cual se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y, subsidiariamente, el que regule la legislación del Estado.

3. Cuando la propuesta de resolución del procedimiento sancionador tramitado por la Administración del Ayuntamiento contenga una sanción que, por la cuantía de la multa o por su carácter, no sean de competencia municipal, el alcalde o alcaldesa elevará el expediente al órgano correspondiente de la Administración que sea competente para imponer la sanción que proceda, de conformidad con la legislación sectorial aplicable.

Artículo 101. Apreciación de delito o falta.

1. Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudiesen constituir infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas.

2. En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las conductas ilícitas, la incoación de un proceso penal no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos, pero la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, permanecerá hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción. Los hechos declarados probados en vía judicial vincularán la autoridad competente para imponer la sanción administrativa.

3. La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se aprecia diversidad de fundamento.

4. Las medidas provisionales adoptadas en el si del procedimiento administrativo sancionador antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el presunto infractor sobre el establecimiento o vigencia de dichas medidas provisionales.

Artículo 102. Prescripción y caducidad.

La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa sancionadora general, sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial.

Capítulo tercero: reparación de daños.

Artículo 103. Reparación de daños.

1. La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta Ordenanza no exonera a la persona infractora de la obligación de reparar los daños o perjuicios causados.

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, en su caso, la Administración tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de resarcimiento que proceda.

Capítulo cuarto: medidas de policía administrativa.

Artículo 104. Órdenes singulares del alcalde o alcaldesa para la aplicación de la Ordenanza.

1. El Alcalde o Alcaldesa puede dictar las órdenes singulares o nominativas y las disposiciones especiales que sean procedentes sobre la conducta en la vía pública o el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, a fin de hacer cumplir la normativa de convivencia ciudadana y de civismo.

2. Sin perjuicio de la imposición de la sanción que, en su caso, corresponda, el alcalde o alcaldesa podrá también requerir a las personas que sean halladas responsables de alguna de las conductas descritas en esta Ordenanza que se abstengan en el futuro de realizar actuaciones similares dentro del término municipal.

3. El incumplimiento de las órdenes, disposiciones o requerimientos a que se ha hecho referencia en los apartados 1 y 2 de este artículo serán sancionados en los términos previstos en esta Ordenanza, sin perjuicio que se pueda iniciar procedimiento penal por causa de desobediencia.

Capítulo quinto: medidas de policía administrativa directa.

Artículo 105. Medidas de policía administrativa directa.

1. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las disposiciones previstas en esta Ordenanza, y sin perjuicio de proceder a denunciar aquellas conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas que no respeten las normas a cesar en su actitud o comportamiento advirtiéndoles que, en caso de resistencia, pueden incurrir en responsabilidad criminal por desobediencia.

2. Cuando la infracción cometida provoque, además una perturbación de la convivencia ciudadana y el civismo, un deterioro del espacio público se requerirá a su causante que proceda a su reparación, restauración o limpieza inmediatas, cuando sea posible.

3. En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 1 de este artículo, las personas infractoras podrán ser desalojadas, cumpliendo en todo caso con el principio de proporcionalidad.

4. Al efecto de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, los agentes de la autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable para que se identifique. De conformidad con lo que se dispone en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, si la persona que ha cometido una infracción no pudiese ser identificada, los agentes de la autoridad podrán requerirla para que, a fin de iniciar el expediente sancionador de la infracción cometida, les acompañe a dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos únicos efectos y por el tiempo imprescindible, la persona infractora informará de los motivos del requerimiento de acompañamiento.

5. En todo caso, y al margen de la sanción que corresponda imponer por la infracción de las normas que hayan originado la intervención o requerimiento de los agentes de la autoridad, las conductas obstruccionistas tipificadas en las letras b) i c) del apartado 1 del artículo 89 constituyen una infracción independiente, sancionadas de acuerdo con el apartado 2 de dicho artículo 89, salvo que el hecho sea constitutivo de responsabilidad criminal, en este caso se pasará el tanto de culpa al Ministerio Fiscal.

Capítulo sexto: medidas provisionales.

Artículo 106. Medidas provisionales.

1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiese imponerse. Estas medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general y sectorial aplicable en cada caso, y tendrán que ser proporcionales a la naturaleza y la gravedad de la infracción.

3. Cuando la Ley así lo contemple, las medidas provisionales se podrán adoptar también con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador.

En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones cometidas por personas extranjeras no residentes en el territorio español, se tendrán que tener en cuenta las disposiciones especiales de procedimiento previstas en los artículos 92.2 de esta Ordenanza.

Artículo 107. Decomisos.

1. Además de los supuestos en que así se contempla expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la autoridad podrán, en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieron, directa o indirectamente, para su comisión, así como el dinero, frutos o productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo la custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador o, a falta de este, mientras perduren las circunstancias que lo motivaron.

2. Los gastos ocasionados por el decomiso serán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado.

3. Si se trata de bienes fungibles, se destruirán y se les dará la destinación que sea conveniente. Los objetos decomisados se depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del expediente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular haya recuperado el objeto se procederá a su destrucción o los entregará gratuitamente a entidades sin afán de lucro con finalidades sociales.

4. El decomiso del objeto/material intervenido se prolongará por un periodo de 72 horas. En el supuesto de retirada de vehículos, el titular del vehículo será responsable del abono de los gastos correspondientes a la retirada y custodia de este.

Capítulo séptimo: medidas de ejecución forzosa.

Artículo 108. Multas coercitivas.

Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo que dispone la legislación sectorial.

Disposición Adicional

Única. La existencia en el municipio de Sant Josep del aeropuerto vincula esta administración en la prestación de servicios destinados a garantizar la seguridad y convivencia de las personas en dicho espacio. Esta prestación de servicios quedará vinculada a la existencia de acuerdos entre las dos partes, que

podrán afectar tanto a zonas públicas como privadas del aeropuerto, incluida la regulación y control de tráfico en las zonas descritas.

Disposició Transitoria

Única. Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se regirán, en aquello que no perjudique a la persona imputada, por el régimen sancionador vigente en el momento de cometerse la infracción.

Disposició Derogatoria

Única. Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las ordenanzas municipales de Sant Josep de sa Talaia que contradigan la presente Ordenanza.

Disposiciones Finales

Primera. Difusión de la Ordenanza.

Tan pronto como sea aprobada esta Ordenanza, el Ayuntamiento elaborará una edición especialmente preparada para ser distribuida ampliamente en diferentes puntos del municipio, como son oficinas de atención al ciudadano, centros cívicos, centros educativos, estaciones de autobuses, puerto y aeropuerto, playas, plazas y mercados, oficinas de turismo y de información, hoteles, pensiones y establecimientos de pública concurrencia, asociaciones vecinales y entidades ciudadanas, entre otras.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia implantará un sistema de cobro anticipado e inmediato de multas y medidas provisionales con las rebajas pertinentes a través de un sistema automatizado o de dispositivos específicos, sin perjuicio que, en todo caso, el pago pueda hacerse efectivo a través de las entidades financieras previamente concertadas.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que no se haya publicado íntegramente en el BOIB y hasta que no haya transcurrido el plazo que señala el artículo 113 de la Ley 20/06, de 15 de Diciembre.'

Sant Josep de sa Talaia, 17 de agosto de 2009.

El Alcalde, Fdo. Josep Marí Ribas.

— o —

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Num. 18989

D'acord amb l'establert a l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i un cop intentada la notificació a l'obligat tributari o al seu representant en el seu domicili fiscal, o en el designat per l'interessat si es tracta d'un procediment iniciat a sol·licitud del mateix, per dues vegades, o una sola vegada si el destinatari consta com a desconegut en el domicili abans indicat, sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a aquesta Administració, es posa de manifest, mitjançant el present anunci, que es troba pendent de notificar liquidació tributaria segons relació que s'adjunta.

En virtut de tot l'exposat se cita a l'interessat perquè comparegui personalment, o bé mitjançant un representant, o una persona expressament autoritzada per a rebre la notificació, a les oficines del Departament de Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, de dilluns a divendres, en horari de 9 hores a 14 hores en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes de procedir a la notificació de l'acte administratiu esmentat.

Transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per a comparèixer.

Sant Joan de Labritja,

El Secretari,

NIF	Nombre sujeto pasivo	Municipio	Concepto	Año	Documento	Importe
41452255E	GARCIA PALERM RAQUEL	EIVISSA	I.CONSTRUCC., INSTAL. Y	2009	9	2.462,70
B0785585I	KEEP HOUSE IBIZA SL	EIVISSA	I. INC. VALOR TERRENYS	2009	2	148,76
B0785585I	KEEP HOUSE IBIZA SL	EIVISSA	I. INC. VALOR TERRENYS	2009	4	148,76
50748466R	DEL PALACIO GARCIA CALDERON RAM	MADRID	SANCIÓN DE ORDEN PÚBLIC	2008	9	60,00
X5051077R	EDWARDS OLIVER	SANT ANTONI DE	I.CONSTRUCC., INSTAL. Y	2009	12	1.197,47
B04409744	BASE ENTERPRISES SL	SANT JOAN DE LA	I.CONSTRUCC., INSTAL. Y	2009	8	760,49
07490801T	DOMINGUEZ GARCIA-GIL JOSE CARLO	SANT JOAN DE LA	SANCIÓN DE ORDEN PÚBLIC	2008	12	500,00
41454224J	ESCANDELL ESCANDELL JUAN	SANT JOAN DE LA	SANCIÓN DE ORDEN PÚBLIC	2008	5	350,00
46132976J	FERNANDEZ ARGUEDAS LORENZO	SANT JOAN DE LA	I. INC. VALOR TERRENYS	2009	31	56,38
46850540T	HOZ CASTILLO ALBERTO DE LA	SANT JOAN DE LA	SANCIÓN DE ORDEN PÚBLIC	2008	4	60,00
B07944036	LANDERS & IBIZA SL	SANT JOAN DE LA	I. INC. VALOR TERRENYS	2009	5	446,27
41437010A	MARI GUASCH JUAN	SANT JOAN DE LA	SANCION URBANISTICA	2009	4	282,99
41437010A	MARI GUASCH JUAN	SANT JOAN DE LA	T. SERVICIOS URBANISTIC	2009	2	26,60
41437010A	MARI GUASCH JUAN	SANT JOAN DE LA	I.CONSTRUCC., INSTAL. Y	2009	11	226,39
33472385W	ORON MATEU LUIS RICARDO	SANT JOAN DE LA	SANCIÓN DE ORDEN PÚBLIC	2008	1	350,00
29197035F	KHAZZOUM ALVAREZ ELIAS	VALENCIA	SANCIÓN DE ORDEN PÚBLIC	2008	2	60,00
48473259T	MENOR CESPEDES ESTHER	VILLENA	SANCIÓN DE ORDEN PÚBLIC	2008	8	60,00

— o —

Ajuntament de Santa Eulària del Riu

Num. 18764

Per decret d'alcaldia núm. 779/2009 de data 03 d'agost de 2009 es procedeix l'aprovació de la llista de persones admeses i excloses de data 12 d'agost, dins la convocatòria efectuada per cobrir 8 places d'agent de policia local de Santa Eulària des Riu, que diu:

Vicent Marí Torres, Alcalde-President de L'ajuntament de Santa Eulària des Riu,

Un cop transcorregut el termini previst per a la presentació de instàncies per formar part en el concurs per a la provisió en propietat de vuit places d'agent de Policia Local de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu i de conformitat amb el que estableixen les Bases reguladores per a la provisió definitiva de vuit places de Policia Local publicades al BOIB Núm. 70 de data 14-05-2009

Resolc:

Primer: Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses: